

El terremoto de Tohoku (Japón) de marzo de 2011: implicaciones económicas

Parece claro que se ha tratado de la tragedia natural más costosa de la historia. A finales de marzo, el gobierno japonés estimó la destrucción de capital físico en una cifra situada entre 16 y 25 billones de yenes, equivalentes a entre el 3,3% y el 5,2% del PIB.

Pablo Bustelo

Ideas e intereses en la reforma de la gobernanza económica del euro

La dificultad para interpretar cada uno de los elementos de la reforma radica en que cada decisión que se adopta está determinada por un rompecabezas con tres piezas: las ideas, los intereses y las instituciones.

Federico Steinberg

Siria ante la revuelta: el blindaje del régimen

El “efecto dominó” ha llegado a Siria. Los manifestantes exigen más libertades y el fin del Estado autoritario. El régimen sirio ha decidido blindarse considerando que las reformas no deben realizarse bajo presión popular.

Ignacio Álvarez-Ossorio

Empleo y políticas de empleo en el Norte de África: de causas de las revueltas a claves de la transición

En el nuevo escenario surgido tras la caída de los regímenes tunecino y egipcio, toda la atención se está poniendo en la reforma política y la transición democrática, sin un debate ni un análisis sobre las políticas económicas necesarias para garantizar la estabilidad.

Iván Martín

Real Instituto Elcano

El Real Instituto Elcano es una fundación privada, independiente de la Administración Pública y de las empresas que la financian, que se constituyó bajo la presidencia de honor de SAR el Príncipe de Asturias el 27 de diciembre de 2001.

El Instituto se define como una institución apartidista, aunque no neutral, con vocación prospectiva, que utiliza diversos enfoques disciplinares con el propósito de generar propuestas que, más allá de su interés teórico, puedan resultar de aplicación práctica.

La misión esencial del Real Instituto Elcano es generar ideas sobre la realidad internacional y sobre las opciones estratégicas de España en las relaciones internacionales que resulten útiles a los responsables políticos, la empresa privada, el mundo académico, los medios de comunicación y la opinión pública en general.

Los valores y objetivos básicos que inspiran la actuación del Instituto son:

- la paz en las relaciones internacionales;
- la cooperación económica y la solidaridad entre los Estados y los pueblos;
- el respeto a los derechos humanos;
- la promoción y defensa de la democracia y de sus valores;
- la concordia entre los Estados, pueblos y civilizaciones del mundo.

El Real Instituto Elcano tiene como objetivos prioritarios:

- analizar el escenario internacional con el fin de producir análisis, estudios e informes que arrojen luz sobre la evolución del mismo;
- difundir esos trabajos con la meta de participar e influir en

el debate público global sobre la realidad internacional;

- servir de foro de encuentro y debate, a fin de fortalecer el diálogo entre agentes públicos y privados;
- fomentar el crecimiento y desarrollo de la comunidad académica española dedicada a los estudios internacionales y estratégicos



Si desean suscribirse a nuestro Boletín y/o Newsletter electrónico, pueden hacerlo visitando la página:

www.realinstitutoelcano.org/boletinsubs.asp

Editor: Real Instituto Elcano
Coordinadora: Carola García-Calvo
ISSN 1696-3466
Depósito Legal: M.23.689-2003

Real Instituto Elcano
C/ Príncipe de Vergara, 51
28006 Madrid
Teléfono: 91 781 67 70
Fax: 91 426 21 57
E-mail: info@rielcano.org

El terremoto de Tohoku (Japón) de marzo de 2011: implicaciones económicas

Pablo Bustelo

Compara los efectos económicos del terremoto de Tohoku con los del terremoto de Kobe en 1995. Expone las consecuencias previsibles del terremoto de Tohoku en la economía de Japón. Finalmente, analiza las diferentes vías de impacto en la economía mundial de la crisis japonesa, para concluir que la incidencia será modesta.

4

Ideas e intereses en la reforma de la gobernanza económica del euro

Federico Steinberg

Explica la reforma de la gobernanza económica de la zona euro en función del papel que juegan en ella las ideas y los intereses. Analiza las dos narrativas contrapuestas sobre la crisis y los intereses de los miembros del euro; ambos aspectos están moldeando la reforma en curso.

7

Siria ante la revuelta: el blindaje del régimen

Ignacio Álvarez-Ossorio

El “efecto dominó” ha llegado a Siria. Los manifestantes exigen más libertades y el fin del Estado autoritario. El régimen sirio ha decidido blindarse considerando que las reformas no deben realizarse bajo presión popular.

12

Empleo y políticas de empleo en el Norte de África: de causas de las revueltas a claves de la transición

Iván Martín

Una variable fundamental de la función de estabilidad social a corto y medio plazo de los países árabes mediterráneos, de Marruecos a Siria, es la situación del empleo y las políticas de empleo. Y dicha variable dependerá mucho de la oferta que la UE haga a esos países.

17

Documentos de trabajo y libros publicados

ARI, especiales Elcano, materiales de interés y próximas actividades

Actividades realizadas en abril

23

El terremoto de Tohoku (Japón) de marzo de 2011: implicaciones económicas

Desde el punto de vista económico, es aún demasiado pronto para disponer de estimaciones fiables del coste de la catástrofe. En todo caso, parece claro que se ha tratado de la tragedia natural más costosa de la historia.

Pablo Bustelo

Tema

El grave terremoto sufrido por Japón el pasado 11 de marzo tendrá seguramente efectos negativos apreciables en la economía nacional y moderados en la economía mundial.

Resumen

La triple tragedia sufrida por Japón el 11 de marzo de 2011 (terremoto de magnitud 9, *tsunami* con olas de hasta 10 metros y crisis nuclear en la central de Fukushima) ha tenido un enorme coste humano y material. Desde el punto de vista económico se ha tratado de la catástrofe natural más costosa de la historia. Este análisis compara, en primer lugar, los efectos económicos del terremoto de Tohoku con los del terremoto de Kobe en 1995. En segundo término, expone las consecuencias previsibles del terremoto de Tohoku en la economía de Japón, cuyo PIB seguramente se contraerá en 2011. Finalmente, analiza las diferentes vías de impacto en la economía mundial de la crisis japonesa, para concluir que la incidencia será modesta, salvo que se agrave mucho la crisis nuclear, lo que parece poco probable.

Análisis

Como es bien conocido, Japón sufrió el 11 de marzo de 2011 una triple tragedia: un terremoto de magnitud 9 en la escala de Richter (el peor desde que empezaron los registros hace 140 años), con epicentro en el mar a 72 km al este del extremo de la región nororiental de Tohoku; un *tsunami* con olas de hasta 10 metros; y una grave crisis nuclear en la central de Fukushima.

Importancia del desastre

El balance de víctimas, a 10 de abril, del terremoto de Tohoku (o del Este de Japón, como es denominado oficialmente) era de más de 12.000 fallecidos y más de 15.000 desaparecidos. A esas cifras, enormes para un país desarrollado, hay que sumar otras no menos impresionantes: 165.000 personas viviendo en refugios, 260.000 hogares sin agua corriente, 170.000 viviendas sin electricidad (sin contar los efectos de la réplica del 8 de abril, de magnitud 7,1) y 70.000 personas evacuadas del perímetro de 20 km alrededor de la central de Fukushima. Hay que comparar las cifras de personas fallecidas con las 6.000 muertes del terremoto de Kobe en enero de 1995. Están, sin embargo, muy alejadas de las víctimas mortales del terremoto de Sichuán (China) en 2008, que alcanzaron las 70.000, y, sobre todo, del terremoto de Haití en 2010 (más de 310.000 personas fallecidas). Esa diferencia es indicativa del alto grado de preparación ante las catástrofes y del elevado desarrollo económico de Japón: en caso de haberse producido un sismo de esa magnitud en un país menos capacitado y en desarrollo, las víctimas mortales se hubieran contado seguramente por centenares de miles.

Desde el punto de vista económico, es aún demasiado pronto para disponer de estimaciones fiables del coste de la catástrofe. En todo caso, parece claro que se ha tratado de la tragedia natural más costosa de la historia. A finales de marzo, el gobierno japonés estimó la destrucción de capital físico (infraestructuras, fábricas y viviendas) en una cifra situada entre 16 y 25 billones de yenes (entre 198.000 y 308.000 millones de dólares), equivalentes a entre el 3,3% y el 5,2% del PIB. Hay que tener en cuenta que esa estimación se refiere únicamente a los daños en el *stock* de capital y excluye, por tanto, los efectos sobre los flujos, es decir, la merma en la producción. En comparación, los terremotos de Northridge (California) en 1994 y de Kobe en 1995 tuvieron un coste de 205.000 millones y 175.000 millones de dólares (actuales), respectivamente, mientras que el coste del huracán Katrina en 2005 rondó los 120.000 millones de dólares (actuales). El coste del terremoto de Kobe (llamado también terremoto de Hanshin, nombre de la región situada entre Kobe y Osaka) representó el 2% del PIB de Japón, proporción que se duplicará seguramente con creces en el de Tohoku.

Comparación con el terremoto de Kobe (1995)

El terremoto de marzo de 2011 tuvo su epicentro cerca de la región nororiental de Tohoku (cuyas seis prefecturas son el origen del 6% del PIB japonés), esto es, afectó a una región más o menos similar, en cuanto a peso económico, a la prefectura de Hyogo, la más afectada por el terremoto de Kobe en 1995. Sin embargo, hay tres grandes diferencias entre el terremoto de Tohoku y el de Hanshin. En primer lugar, esta vez se han producido, en las semanas posteriores, apagones eléctricos a gran escala, como consecuencia de la desestabilización del suministro de electricidad provocado por los desperfectos en las plantas generadoras. Las empresas Tokyo Electric Power (TEPCO) y Tohoku Electric Power perdieron un 20% de su capacidad.

Ambas dan suministro a la mitad de la actividad económica de Japón. En segundo término, ha habido cadenas de suministro –nacionales e internacionales– que se han visto negativamente afectadas, especialmente en componentes electrónicos y de automoción. Algunas fábricas de importantes empresas japonesas tuvieron que parar su producción durante varios días. En tercer lugar, la grave crisis de la central de Fukushima se ha prolongado durante semanas, en lo que es ya el peor accidente nuclear desde el de Chernóbil en 1986, provocando emisiones radiactivas (cuyo alcance final no está todavía claro), concentrando la atención del gobierno y retrasando los esfuerzos de reconstrucción.

Los efectos en la economía de Japón

Japón se estaba recuperando, antes de la tragedia, de los efectos de la crisis financiera internacional reciente, que provocó en 2009 una caída del PIB del 6,3%, la mayor entre los países desarrollados. En 2010 el PIB creció el 3,9%, aunque en el último trimestre del año la tasa anualizada de variación del PIB fue negativa (-1,3%), como consecuencia del final de los estímulos que el gobierno había desplegado para hacer frente a la crisis.

Antes del 11 de marzo, las previsiones de crecimiento del PIB en 2011 se situaban en una horquilla de 1,3% a 2,0%. Tras el terremoto, los destrozos en el capital físico, las interrupciones de suministro de electricidad, los efectos adversos en algunas cadenas de abastecimiento (en el país del mundo que más ha desarrollado el *just in time*) y los efectos psicológicos de la crisis nuclear en el consumo y la inversión provocarán seguramente que la variación del PIB en 2011 sea negativa. La mayor parte de las previsiones publicadas a principios de abril arrojan una caída de entre 0,5% y 1,0%, aunque no cabe descartar que el descenso del PIB pueda ser mayor, particularmente si la crisis nuclear se prolonga durante varios meses o si tiene efectos ambientales mayores que los previstos hasta ahora. Algunos economistas anticipan una evolución en forma de V (caída inicial seguida inmediatamente de una recuperación, a medida que surten efecto las medidas de reconstrucción). No obstante, en este caso (a diferencia de Kobe), las consecuencias combinadas de la destrucción de capital físico y del freno de la actividad empresarial, por los apagones eléctricos y los efectos negativos en las cadenas de suministro, están siendo muy importantes. De lo que no hay duda es que el PIB caerá en el primer y segundo trimestres de 2011, situando al país en abierta recesión (con tres trimestres consecutivos de descenso), con independencia de una eventual recuperación en octubre-diciembre de este año.

Los esfuerzos de reconstrucción, que serán los mayores desde los inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial, se dejarán notar realmente en 2012, año para el que se prevé un crecimiento claramente superior al anticipado antes del terremoto (en torno al 2%). El incremento del PIB en 2012 podría situarse entre 3,0% y 3,5%, una cifra alta para un país como Japón, que ha tenido una expansión muy lenta desde los años noventa del siglo XX. Como tanto el déficit presupuestario (9,6% del PIB en 2010) como la deuda pública (226% del PIB en 2010, la más alta de la OCDE)

son muy elevados, los gastos de reconstrucción podrían agravar los problemas de deuda pública del país y quizá provocar algunas tensiones en los mercados de deuda a nivel internacional, aunque únicamente el 5% de la deuda está en manos de no residentes, por lo no es previsible una crisis de deuda como la padecida por algunos países de la periferia europea.

De lo que no hay duda es que el PIB caerá en el primer y segundo trimestres de 2011, situando al país en abierta recesión

Implicaciones en la economía global

Los efectos del terremoto de Tohoku en la economía mundial no serán importantes, salvo naturalmente que se agrave mucho la crisis nuclear de la central de Fukushima o que los apagones eléctricos afecten sustancialmente al área metropolitana de Tokio. Las previsiones mayoritarias de los analistas prevén una merma en el crecimiento mundial de entre 3 y 5 décimas, desde el 3,9% al 3,6%-3,4%.

La razón principal es que Japón es en la actualidad la tercera economía mundial y representa alrededor del 9% del producto bruto mundial (llegó a suponer el 14% en 1990). En 2010 Japón fue superado por China, que se situó en segunda posición mundial por tamaño del PIB. Además, la contribución de Japón al crecimiento del producto bruto mundial ha sido muy escasa en los últimos años: un más que discreto 5%, frente al 21% de China, el 14% de la UE y el 12% de EEUU, y comparable a la contribución de la India (4%), que tiene un PIB cuatro veces menor.

Así, con menos del 10% del producto bruto mundial, una caída del crecimiento del PIB de Japón de 3 puntos (del 2% al -1%) afectaría en 0,3% al ritmo de crecimiento de la economía mundial. Si la caída fuese mayor (hasta el -3%), la repercusión sería de 0,5%.

Es más, los efectos comerciales de la crisis japonesa serán moderados: Japón es el destino del 8% de las exportaciones chinas, del 5% de las de EEUU y del 2% de las de la UE. Sólo algunos países de Asia oriental (como Filipinas, Indonesia y Malasia) tienen a Japón como uno de sus principales mercados.

Con todo, hay que tener en cuenta que la economía mundial se encuentra todavía en una fase de recuperación, relativamente frágil, de la crisis financiera internacional de 2007-2009, la peor perturbación desde los años 30 del siglo XX. A tal cosa hay que sumar los problemas de deuda soberana en algunos países de la periferia europea (Grecia, Irlanda y Portugal) y los muy altos precios del petróleo, como consecuencia de la inestabilidad en los países árabes y la intervención militar en Libia, que están obligando a algunos bancos centrales a subir los tipos de interés, frenando así el ritmo de recuperación. Por añadidura, la política fiscal ya ha agotado su carácter expansivo y está siendo restrictiva en las economías principales.

Así y todo, no cabe esperar una gran perturbación por la caída prevista del PIB de Japón en 2011, puesto que la recuperación en curso parece ser bastante sólida, al menos en EEUU, Alemania, Francia y Canadá, además de en las grandes economías emergentes.

Los efectos del terremoto de Tohoku en la economía mundial no serán importantes, salvo naturalmente que se agrave mucho la crisis nuclear de la central de Fukushima o que los apagones eléctricos afecten sustancialmente al área metropolitana de Tokio

No obstante, son previsibles efectos de cierta importancia en algunas cadenas internacionales de suministro, en las bolsas de valores, en el tipo de cambio del yen y en los mercados de materias primas, especialmente energéticas, así como en algunos flujos internacionales de capital.

La escasez de componentes –sobre todo en la industria electrónica y de automoción– debida al terremoto de Japón será temporal y afectará sobre todo a las fábricas japonesas en el extranjero. La inestabilidad bursátil seguramente continuará, aunque es difícil distinguir el efecto de la caída de la bolsa de Tokio (el índice Nikkei ha caído el 10% desde el 11 de marzo) del de otros factores, como la intervención militar en Libia o la crisis de Portugal. En cuanto al tipo de cambio del yen, inmediatamente después del terremoto se registró una importante apreciación del yen como consecuencia de la repatriación de fondos desde el extranjero y de la conversión de moneda extranjera en yenes para hacer frente a la reconstrucción. Sin embargo, la intervención concertada de los bancos centrales de los países del G7, preocupados por las repercusiones del valor del yen en las exportaciones japonesas, ha frenado esa apreciación. Habrá que ver cuál de las dos fuerzas es más importante en los próximos meses, aunque no cabe descartar que las autoridades monetarias japonesas y extranjeras consigan, a medio plazo, estabilizar, tal y como pretenden, el yen al nivel actual. En lo que se refiere a los mercados internacionales de materias primas, el efecto se dejará notar en los casos del carbón y, en menor medida, del gas natural y del petróleo. La razón es que una décima parte de la generación de electricidad de Japón quedó fuera de juego por los destrozos del terremoto y del *tsunami* y por los problemas en algunas plantas nucleares, de manera que el país se verá obligado a aumentar sus importaciones de hidrocarburos. Japón fue en 2010 el primer importador mundial de carbón y gas natural y el segundo de petróleo. Dada la distribución por fuentes de la electricidad (30%, en cada caso, para gas natural y nuclear, 25% para carbón, 8% para hidroelectricidad y 7% para petróleo), lo más probable es que el impacto se deje notar más en los precios del carbón y del gas natural que en el precio de petróleo. En cualquier caso, el impacto será moderado y temporal, a medida que se recomponen las centrales nucleares que se pararon, sin dañarse, en el momento del terremoto.

Finalmente, cabe esperar un descenso de la inversión de

Japón en el extranjero, tanto directa como en cartera, así como quizá también de su ayuda oficial al desarrollo. En 2010 la inversión directa en el extranjero de las empresas japonesas fue de 57.700 millones de dólares, frente a los 130.800 millones registrados en 2008. Cabe esperar que el descenso continúe en 2011 y que incluso se haga más pronunciado. En cuanto a la inversión en cartera, un aspecto interesante a observar en los próximos meses es si se reducirán o no las tenencias japonesas de títulos del Tesoro de EEUU, que ascendieron, en enero de 2011, a 885.900 millones de dólares, situando a Japón en segundo lugar en la lista de poseedores extranjeros, detrás de China (1,15 billones de dólares). La ayuda oficial al desarrollo fue de 11.000 millones de dólares en 2010 (quinto mayor donante del CAD, tras EEUU, el Reino Unido, Francia y Alemania), frente a los 7.700 millones de 2007 (y los 13.100 millones de 2005). Es de esperar que, como consecuencia del terremoto de marzo de 2011, la ayuda japonesa modere su crecimiento. No cabe descartar incluso una reducción, como la registrada entre 2005 y 2007.

Conclusión

El terremoto de Tohoku de marzo de 2011 ha tenido enorme coste en vidas humanas, pese al alto nivel de desarrollo de Japón y a su elevado grado de preparación ante los seísmos. En términos económicos, se ha tratado de la catástrofe natural más costosa de la historia, por delante de los terremotos de Northridge en 1994 y de Kobe en 1995.

Los destrozos en el capital físico (que podrían rondar los 300.000 millones de dólares, el 5% del PIB), las interrupciones de suministro de electricidad, los efectos adversos en algunas cadenas de abastecimiento y los efectos psicológicos, en el consumo y la inversión, de la crisis nuclear de la central de Fukushima provocarán seguramente que la variación del PIB sea negativa en 2011. Las labores de reconstrucción, que serán las mayores desde las inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial, se dejarán notar realmente en 2012, año para el que se prevé un crecimiento claramente superior al anticipado antes del terremoto.

Los efectos a escala mundial serán previsiblemente modestos, porque Japón supone el 9% del producto bruto mundial y ha generado apenas el 5% del crecimiento de ese producto en 2005-2010. A principios de abril, las previsiones mayoritarias de los analistas prevén una merma en el crecimiento mundial en 2011 de entre 3 y 5 décimas, desde el 3,9% al 3,6%-3,4%. No obstante, cabe esperar efectos de cierta importancia en algunas cadenas internacionales de suministro, en las bolsas de valores, en el tipo de cambio del yen y en los mercados de materias primas, especialmente energéticas, así como en las inversiones directas y en cartera de Japón en el extranjero y, quizá también, en su cooperación oficial para el desarrollo.

Pablo Bustelo

Investigador principal, Asia-Pacífico, del Real Instituto Elcano y profesor titular de Economía Aplicada en la UCM

Tema

La reforma de la gobernanza económica de la zona euro se puede explicar en función del papel que juegan en ella las ideas y los intereses.

Resumen

Este ARI explica la reforma de la gobernanza económica de la zona euro en función del papel que juegan en ella las ideas y los intereses. Analiza las dos narrativas contrapuestas sobre la crisis y los intereses de los miembros del euro; ambos aspectos están moldeando la reforma en curso.

Análisis

El Consejo Europeo de marzo de 2011 había creado una gran expectación. Se esperaba que los países del euro dieran una respuesta definitiva a los problemas económicos de la unión monetaria, reforzando el mecanismo de resolución de crisis y bendiciendo el Pacto por el Euro. En definitiva, esta cumbre estaba llamada a forjar un gran acuerdo que permitiera a la zona euro navegar por los problemas generados por la resaca de la crisis financiera y prepararse para el siglo XXI.

Sin embargo, las conclusiones del Consejo fueron decepcionantes. Tan solo se han producido dos avances. El primero es la ampliación del fondo de rescate (denominado Facilidad Europea para la Estabilización Financiera, FEEF) hasta los 500.000 millones de euros de capacidad efectiva de préstamo. El segundo es que se han puesto los cimientos del llamado Pacto por el Euro Ampliado, que puede considerarse un intento de “alemanizar” las economías europeas, y que, por el momento, ha sido suscrito por todos los países del euro más Bulgaria, Dinamarca, Letonia, Lituania, Polonia y Rumanía, que no forman parte de la moneda única pero se han sumado a la iniciativa.

Para los más críticos, estos avances son insuficientes y demuestran la incapacidad de la UE para reaccionar ante las adversidades. Sin embargo, para los optimistas, son un paso más en la dirección adecuada, que se suma a los muchos otros que la UE ha dado en el último año para fortalecer la arquitectura del euro. En las próximas páginas se explica que la dificultad para interpretar cada uno de los elementos de la reforma radica en que cada decisión que se adopta está determinada por un rompecabezas con tres piezas: las ideas, los intereses y las instituciones. Las ideas y la ideología (sobre el diagnóstico del problema o sobre las políticas adecuadas para resolverlo) interactúan con los intereses de los Estados, de sus grupos de presión, de la Comisión, del Parlamento europeo y de la Presidencia Permanente del Consejo Europeo; y por último, los complejos procesos institucionales establecen restricciones que moldean la decisión final. Como estas tres fuerzas actúan simultáneamente y la interacción se produce a varios niveles, no resulta sencillo desentrañar el peso de las distintas variables.

Ideas e intereses en la reforma de la gobernanza económica del euro

El Consejo Europeo de marzo de 2011 había creado una gran expectación. Se esperaba que los países del euro dieran una respuesta definitiva a los problemas económicos de la unión monetaria, reforzando el mecanismo de resolución de crisis y bendiciendo el Pacto por el Euro.

Federico Steinberg

¿Vaso medio lleno o medio vacío?

Es cierto que el Consejo Europeo de marzo no disipó las dudas sobre la sostenibilidad de las deudas griega e irlandesa, el rescate a Portugal y la todavía elevada debilidad de la banca en los distintos países (incluyendo Alemania). Las divisiones han impedido un gran acuerdo capaz de despejar definitivamente las dudas de los mercados financieros, completar la nueva arquitectura del euro y avanzar hacia una mayor coordinación de las políticas económicas. Para las voces más críticas el diagnóstico está claro. Para que una Unión Monetaria funcione son necesarias, además de un Banco Central, profundas reformas de las instituciones económicas nacionales y un sistema de transferencias fiscales desde unas regiones a otras. Pero las restricciones políticas internas tanto de los países más ricos, que no quieren ni oír hablar de estas transferencias, como las de los que tienen problemas, que se resisten a hacer cambios en sus instituciones económicas nacionales a la velocidad necesaria, hacen que esto sea imposible.

Sin embargo, si se mira la situación en perspectiva histórica el diagnóstico no debería ser tan pesimista. Tan solo hace un año que se comenzó a diseñar el rescate a Grecia, que en aquel entonces tuvo que hacerse con préstamos bilaterales entre los países (y apoyo del FMI) porque aún no existía la FEEF. La FEEF, que es una facilidad temporal creada a raíz del rescate a Grecia, estará vigente hasta 2013, fecha en la que la sustituirá el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEE), el fondo permanente de rescate que se incorporará en los Tratados.

En este cortísimo período de tiempo se han producido muchos avances. Primero, se ha creado el MEE, que los 27 han acordado introducir en el Tratado de Lisboa, tan solo

dos años después de su turbulenta ratificación. El MEE es prácticamente un Fondo Monetario Europeo y de hecho tendrá capacidad, como ya tiene su precursora, la FEEF, para emitir títulos de deuda europeos; es decir, eurobonos “camuflados”.

Segundo, se están negociando seis propuestas legislativas para modificar las principales áreas del gobierno económico europeo. Supondrán la reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) de forma que sea más exigente respecto a la consolidación fiscal incluso en los casos en los que el déficit público sea inferior al 3% del PIB y que exija mayores esfuerzos de consolidación en los casos en los que la deuda pública supere el 60% del PIB; el refuerzo de los mecanismos de coordinación de las políticas fiscales a través del Semestre Europeo y un nuevo sistema para corregir a tiempo los desequilibrios macroeconómicos –déficit y superávits por cuenta corriente, entre otros–.

Las divisiones han impedido un gran acuerdo capaz de despejar definitivamente las dudas de los mercados financieros, completar la nueva arquitectura del euro y avanzar hacia una mayor coordinación de las políticas económicas

Tercero, los avances en materia financiera se están produciendo en distintos frentes. Por una parte, ya han entrado en funcionamiento cuatro nuevos organismos comunitarios: el Consejo Europeo de Riesgo Sistémico y las nuevas autoridades europeas de supervisión en materia de Seguros, Valores y Banca. Esta última está coordinando las pruebas de resistencia del sector financiero en todos los países de la UE, cuya segunda vuelta se realizará en junio de 2011. Además, siguiendo los principios del foro de Estabilidad Financiera y del G-20, se han aprobado directivas sobre mayores requisitos de capital para las instituciones financieras en la UE, así como nuevas reglas sobre la remuneración de los directivos del sector financiero. En definitiva, la mayoría de las iniciativas de reforma financiera en la UE han dado lugar a nuevas reglas e instituciones comunitarias.

Por último, se han puesto las bases de un pacto por la competitividad, suavizado y renombrado Pacto por el Euro Ampliado, que intenta incentivar mejor que la Estrategia UE 2020 a los gobiernos para que pongan en marcha medidas de fomento de la competitividad y de sostenibilidad de las cuentas públicas. Esto debería servir para mandar un mensaje de confianza a los mercados financieros y aumentar el potencial de crecimiento de la UE. Este Pacto, sin embargo, todavía es difuso y además no incorpora ningún mecanismo para asegurar su cumplimiento, por lo que podría correr la misma suerte que la Estrategia de Lisboa, en cuyos objetivos para lograr una mayor competitividad y dinamismo de la economía de la UE no se avanzó.

Todas estas reformas podrían haber sido más ambiciosas: el fondo de rescate podría haber sido mayor y contar con

capacidad para comprar deuda o prestar directamente a las instituciones financieras en problemas, se podrían haber creado eurobonos de pleno derecho, se podría haber aumentado el presupuesto de la UE para asegurar un mayor volumen de transferencias entre los más ricos y los países en convergencia de forma continua o el Pacto por el Euro Ampliado podría haber tenido en cuenta objetivos de sostenibilidad y cohesión social. Sin embargo, lo que la zona euro ha logrado en un año, aunque imperfecto, es significativo. E incluso si se quiere medir el éxito por las reacciones de los mercados véase que ante el rescate a Portugal en abril de 2011 el euro no ha hecho más que apreciarse frente a las demás monedas (reflejando más bien poca preocupación de los inversores sobre el futuro de la moneda única) y que el contagio a España y otros países no se ha producido, lo que demuestra que los mercados empiezan a discriminar entre los distintos países.

Hay dos factores que oscurecen estos logros y alimentan la interpretación pesimista. El primero es que, efectivamente, existen conflictos entre los países miembros del euro, cuyos gobiernos difieren tanto en el diagnóstico de qué hay que arreglar en la arquitectura del euro como en cómo debe repartirse la carga del ajuste; es decir, quién debería pagar y cuánto. El segundo factor es que el laberinto institucional de la UE es muy complejo y alarga y hace opaca la toma de decisiones superando la paciencia de los ciudadanos, los mercados y los medios de comunicación. Pero mientras la UE no sea una unión política sino un conjunto de Estados-nación que ceden parcelas de su soberanía para conseguir objetivos comunes, necesitará de mecanismos de reparto de poder que sólo son viables con instituciones superpuestas donde se produce una constante negociación a varios niveles. Y esto, lógicamente, hace que los avances sean lentos y los procesos poco claros para el lego.

Ideas: dos diagnósticos sobre la crisis

Uno de los principales impedimentos para que los países de la zona euro caminen en la misma dirección en la reforma de la gobernanza económica es que no coinciden en el diagnóstico de los problemas a los que se enfrentan. Como señalara Keynes al final de su *Teoría General* de 1936: “Las ideas de los economistas y de los filósofos políticos, tanto cuando son correctas como cuando están equivocadas, son más poderosas de lo que comúnmente se cree. En realidad, el mundo está gobernado por poco más que esto”. En el caso que nos ocupa existen dos diagnósticos sobre la crisis que alimentan dos narrativas contrapuestas difíciles de reconciliar.

El primer diagnóstico, que podríamos calificar de ortodoxo liberal, domina el debate sobre todo en Alemania y los Países Bajos y en, general, es compartido por los países acreedores. Afirma que la crisis de la zona euro es el resultado de la falta de disciplina fiscal y del exceso de endeudamiento de los “fiscalmente irresponsables” y “poco competitivos” países de la periferia. Según esta interpretación, ni el débil diseño de la gobernanza económica del euro (que originalmente no contaba con un fondo de rescate y cuyos instrumentos de coordinación fiscal y supervisión financiera eran mucho

más débiles que los de coordinación monetaria), ni la laxa política monetaria pre-crisis del BCE (más adecuada para una Alemania en recesión que para una periferia en expansión), ni la debilidad de la demanda y el exceso de ahorro de Alemania, los Países Bajos o Austria (que implicó superávits por cuenta corriente que terminaron en préstamos a la periferia y alimentaron booms inmobiliarios), ni los fallos de los mercados financieros (que no evaluaron correctamente el riesgo-país dentro de la Unión Monetaria), tendrían responsabilidad alguna.

Según esta narrativa, lo único que hace falta para fortalecer el euro y calmar a los mercados es una mayor disciplina fiscal en la periferia, que debe ser “impuesta” desde el exterior, ya que se habría demostrado que no se puede confiar en la responsabilidad de los gobiernos y electorados de dichos países para apretarse el cinturón. Si esa disciplina fiscal implica grandes recortes en el Estado del Bienestar y una prolongada recesión (incluso acompañada de deflación para recuperar la competitividad-precio de sus exportaciones) los países deben estar dispuestos a asumírselos. Tan sólo contarán con los recursos de la FEEF para poder seguir pagando su deuda si el ajuste es tan duro que les impide a corto plazo hacer frente a sus obligaciones de pago.

Pero existe otra interpretación de la crisis, la dominante en los países del sur (y en menor medida en Francia, en la Comisión y en el Parlamento europeos), que subraya que el aumento del déficit y la deuda pública son el resultado de la crisis financiera internacional (y no su causa). Dado que países como España e Irlanda eran modelos de cumplimiento de las reglas fiscales del PEC –mientras que Alemania y Francia, no–, el origen de la crisis de la zona euro no puede encontrarse en la indisciplina fiscal (salvo en el caso griego), sino en que el edificio de la gobernanza de la zona euro estaba mal diseñado. Si esto fuera así, las reformas, además de fortalecer el PEC e introducir elementos de mayor responsabilidad y coordinación en las cuentas públicas entre países, deberían centrarse en vigilar la generación de desequilibrios macroeconómicos dentro de la zona euro (lo que permitiría alertar y anticipar los problemas y exigiría soluciones que pasarían por cambios de políticas tanto en los países con déficit como en los que tienen superávit), proporcionar una línea de crédito precautoria cuando los países se vean afectados por shocks externos pero tengan fundamentos macroeconómicos sólidos y establecer mayores transferencias fiscales entre estados para compensar la pérdida de política monetaria y cambiaría que experimentan los países que se integran en una moneda única, y que son pérdidas importantes cuando aparecen *shocks* asimétricos.

Es imposible dilucidar cuál de los dos diagnósticos es el correcto ya que ni siquiera existe un consenso en macroeconomía sobre muchos de estos aspectos. Además, son los elementos ideológicos, que por su propia naturaleza son difíciles de modificar, los que condicionan cómo se posicionan los distintos actores en este debate (de hecho hay economistas y políticos en la periferia de la zona euro que defienden la visión ortodoxa imperante en Alemania y viceversa). En cualquier caso, este choque de narrativas

sobre la crisis condiciona de forma superestructural –y en ocasiones sin que los distintos actores sean conscientes de ello– el debate sobre la reforma de la gobernanza del euro. Aunque todos los países puedan coincidir en que se debe salvar el euro a cualquier precio porque el coste político para la UE de no hacerlo sería demasiado alto, las diferencias en el diagnóstico de la crisis y en la identificación de culpables hacen muy difícil una convergencia de opinión sobre qué medidas adoptar. Cuando se introducen en el tablero los intereses, tema al que pasamos a continuación, se hace todavía más difícil alcanzar una síntesis a partir de este choque de narrativas antitéticas.

Aunque a veces han titubeado, todos consideran que los costes de una ruptura del euro serían mucho mayores que los beneficios

Intereses: quién paga, cuánto y cuándo

Los líderes políticos, los gobiernos que intentan representar el interés nacional y las instituciones financieras realizan cálculos coste-beneficio que determinan sus tácticas de negociación. Aunque a veces han titubeado, todos consideran que los costes de una ruptura del euro serían mucho mayores que los beneficios. Para países exportadores y con monedas fuertes como Alemania el euro ha supuesto un seguro contra las devaluaciones periódicas que los países del sur (incluida Francia) hacían con respecto al marco alemán en el pasado, lo que ha mejorado notablemente la contribución del sector exterior a su crecimiento. Para los países con monedas débiles y tendencia a la inflación el euro ha supuesto un ancla de estabilidad y una bajada en los costes de financiación que ha permitido un crecimiento muy significativo (aunque desequilibrado). Finalmente, el euro es un proyecto en el que hay invertido demasiado capital político como para permitir que fracase. Por estos motivos hay intereses convergentes en hacer lo necesario para salvar la moneda única, lo que requiere estabilizar los mercados de deuda pública de los países de la periferia.

Sin embargo, como en el contexto actual proteger al euro requiere sacrificios (ya sean en forma de contribuciones o garantías al fondo de rescate, aumentos de liquidez o compra de deuda por parte del BCE o pagos indirectos mediante reducciones de gasto en los países con problemas de deuda soberana), la cuestión es cómo se reparte la carga del ajuste y en qué momento se realizan los desembolsos y se ponen en práctica los impopulares programas de ajuste. El “cuándo” es crucial porque los ciclos electorales en la UE no están sincronizados y la política europea juega un papel cada vez más importante en el grado de aprobación que los electorados muestran hacia sus dirigentes en las elecciones nacionales y regionales.

Por último, también existe un conflicto de intereses por ganar cuotas de poder entre las distintas instituciones europeas, sobre todo entre el Consejo Europeo, la Comisión

y el Parlamento. El primero representa el modelo de integración basado en el intergubernamentalismo, que en los últimos años ha ganado poder. Por su parte, la Comisión y el Parlamento pretenden restar poder a los Estados-nación e impulsar lo que en la jerga de la UE se conoce como una *ever closer Union* (una Unión cada vez más estrecha).

Al otro lado se encuentran los países de la periferia que ya han pedido apoyo financiero a la Unión o que, como España, tienen situaciones macroeconómicas delicadas que requieren tanto reformas internas como apoyos puntuales por parte del BCE

En este juego de intereses el mayor poder de negociación lo tiene el gobierno alemán. Como la economía alemana es la mayor de la zona euro, la más competitiva, la que registra ahora una mayor tasa de crecimiento, un menor coste de financiación y la que es percibida por los mercados como la más creíble en sus políticas de contención del gasto, es la que tiene que contribuir en mayor medida al apoyo de los países con dificultades (fundamentalmente mediante su aportación a la FEEF y al MEE, aunque también, como en el pasado, como principal contribuyente al presupuesto de la UE). Pero el gobierno de Merkel se mueve entre dos restricciones. Por una parte, necesita estabilizar los mercados de deuda de la zona euro al menor coste posible para el contribuyente alemán, que se muestra cada vez más nacionalista y reacio a seguir transfiriendo recursos a la UE. En este sentido podría decirse que Alemania ya ha superado su complejo de culpabilidad derivado del Holocausto y la Segunda Guerra Mundial, por el cual sólo se entendía a sí misma como “encorsetada” (y a la vez protegida) por el proyecto europeo. Hoy, reunificada y fuerte, cree poder volar sola, incluso al margen de sus socios europeos si estos la presionan para pagar más. Por lo tanto, parece que aquello de “la UE es que todos se ponen de acuerdo y paga Alemania”, tiene sus días contados.

Pero al mismo tiempo, el gobierno alemán es consciente de que, como los bancos alemanes son los principales acreedores de los países e instituciones financieras de la periferia europea, si la ayuda alemana es insuficiente y estos países tienen problemas para hacer frente a sus compromisos, los bancos alemanes incurrirían en pérdidas que pondrían poner en duda su propia viabilidad, ya que muchos de ellos tienen una situación poco saneada por su elevada exposición a activos tóxicos. Este delicado equilibrio explica los titubeos de Merkel: conforme la situación en los mercados de deuda se va tranquilizando reduce su “generosidad” con el fondo de rescate para contentar a los votantes alemanes y mejorar sus perspectivas electorales, mientras que cuando las tensiones financieras aumentan se muestra más dispuesta a contribuir para evitar un efecto dominó que termine tumbando a algún

banco alemán, lo que obligaría a su gobierno a gastar todavía más fondos en su rescate.

Esta misma lógica también sirve para entender la inconsistente posición alemana sobre la posibilidad de aceptar quitas en eventuales reestructuraciones de deuda para países como Grecia, Irlanda o Portugal. Por el momento, el gobierno de Merkel, en contra de la posición de la mayoría de los países, ha impuesto que a partir de 2013 podrá haber *defaults* dentro de la zona euro, pero no antes de esa fecha. Esto significa que se podrá obligar a un país que solicite financiación del MEE después de 2013 a reestructurar su deuda o acordar quitas con los bonistas si se considera que su problema es de solvencia y no de liquidez, lo que supondrá que los acreedores privados podrían sufrir pérdidas, reduciendo así la parte del rescate que tienen que financiar los votantes con sus impuestos (los países de la periferia se oponían a esta opción porque la mera posibilidad de *defaults* futuros incrementa el coste de financiación en el presente). Pero, ¿qué lleva a Alemania a querer una cosa hasta 2013 y la contraria a partir de esa fecha? Pues precisamente que los votantes alemanes están de acuerdo en que los inversores que hayan financiado a países con problemas contribuyan a la solución soportando una quita, pero Merkel necesita ganar tiempo para que los bancos alemanes limpien sus balances y tengan una situación más sólida para hacer frente a eventuales pérdidas causadas por estas quitas. Una vez más, los términos del debate quedan fijados por las restricciones y el margen de maniobra del gobierno alemán (y en mucha menor medida por los de otros países acreedores que comparten el diagnóstico alemán de la crisis y que también se resisten a desembolsar más fondos, como los Países Bajos y Finlandia).

Al otro lado se encuentran los países de la periferia que ya han pedido apoyo financiero a la Unión o que, como España, tienen situaciones macroeconómicas delicadas que requieren tanto reformas internas como apoyos puntuales por parte del BCE. Estos países son, en general, conscientes de la imperiosa necesidad de avanzar en las reformas estructurales para restablecer la confianza y aumentar el crecimiento. También sienten la presión de sus socios de la euro zona por avanzar en dichas reformas para que sus problemas económicos internos no pongan en peligro la estabilidad del euro (de hecho para Grecia, Irlanda y Portugal, esta presión de sus socios se ha convertido ya en la cesión de su política económica a Bruselas a cambio de la ayuda de la FEEF y el FMI).

Sin embargo, como sus gobiernos son conscientes de que una posición más solidaria por parte de los países del centro puede suavizar la dureza del ajuste y la velocidad de las reformas –y por tanto reducir su impacto electoral adverso– maniobran para obtener el máximo de apoyo (en forma de una FEEF mayor y más flexible, menores compromisos de reformas en el Pacto por el Euro Ampliado, o un mayor compromiso del BCE para proporcionar liquidez a sus bancos y comprar deuda pública en el mercado secundario) a cambio de el mínimo de reformas. Aunque su posición negociadora es débil intentan extraer el máximo de concesiones de Alemania. Para ello esgrimen dos argumentos. El primero

es que como la interdependencia financiera dentro de la zona euro es tan elevada es una prioridad para todos los países estabilizar los mercados financieros de deuda. De hecho, este argumento puede fácilmente convertirse en una posición negociadora dura si amenazan con el default de su deuda, que ocasionaría pérdidas a los acreedores en toda Europa y crearía una enorme inestabilidad en los mercados. El segundo, basado en la narrativa de la crisis expuesta arriba, enfatiza que el mero ajuste de cinturón por parte de los países con dificultades no resolverá los problemas de la arquitectura institucional del euro a largo plazo. Sostienen que el euro del futuro necesita más transferencias fiscales entre sus Estados miembros, así como eurobonos para desterrar la especulación contra los títulos de deuda soberana de un país concreto.

Por último, Francia, que históricamente ha tenido una posición opuesta a la de Alemania y ha abogado por establecer contrapesos políticos al BCE e incrementar la coordinación fiscal (incluso con mayores fondos europeos), mantiene, en esta ocasión, una sorprendente posición de alineamiento con las tesis alemanas. Parece haber interpretado que, como se encuentra en una posición de relativa debilidad, la estrategia de alineamiento con Alemania es la única que le permite tener cierta influencia y protagonismo en la reforma de la gobernanza del euro.

En definitiva, como el equilibrio de poder en la zona euro favorece desproporcionadamente a Alemania, las reformas que están saliendo adelante van más en la dirección de alemanizar Europa que de europeizar Alemania, lo cual representa un cambio histórico en la construcción europea.

Conclusión

A pesar de las dificultades, la reforma de la gobernanza de la zona euro avanza a buen paso. En menos de un año se han tomado decisiones importantes para fortalecer el diseño institucional de la unión monetaria en casi todas las áreas en las que se han detectados debilidades importantes (reforma financiera, coordinación fiscal, vigilancia de desequilibrios económicos, creación de un fondo de rescate permanente y acuerdos para impulsar la competitividad y el crecimiento).

La forma concreta que está adoptando la nueva gobernanza del euro responde a la interacción de tres fuerzas: (1) las ideas, que crean narrativas sobre las causas de la crisis; (2) los intereses de los principales países (posibles acreedores

Como el equilibrio de poder en la zona euro favorece desproporcionadamente a Alemania, las reformas que están saliendo adelante van más en la dirección de alemanizar Europa que de europeizar Alemania, lo cual representa un cambio histórico en la construcción europea

frente a posibles deudores), que imponen restricciones políticas y financieras; y (3) las propias instituciones europeas. La interacción de estas tres piezas moldea el resultado final.

Durante este proceso se ha vuelto a poner de manifiesto que la principal restricción a la que se enfrenta la gobernanza económica del euro es la política interna de cada país. En países acreedores como Alemania esto supone una fuerte resistencia a convertir la unión monetaria en una unión fiscal, por lo que el objetivo es hacer viable al euro con el mínimo coste para el contribuyente alemán; es decir, forzando a que los países de la periferia se aprieten el cinturón para estabilizar los mercados de deuda soberana. En los países con problemas este mismo conflicto se representa de otra forma, como bien ilustran los casos de Grecia, Irlanda y Portugal. Como la soberanía nacional reside en el nivel nacional y no en la Unión, los gobiernos se resisten a que las instituciones europea les obliguen a hacer reformas que sus poblaciones no apoyan (sean o no necesarias). Además, pueden amenazar a los acreedores con la reestructuración o el default de su deuda si no reciben suficiente apoyo europeo. Al hacerlo, están dejando claro que más allá del debate sobre comportamientos económicos virtuosos o viciosos del norte y el sur, restablecer la estabilidad financiera en la zona euro, requiere una solución compartida ya que los intereses también son compartidos.

Federico Steinberg

*Investigador principal, Economía Internacional,
del Real Instituto Elcano y Profesor de la
Universidad Autónoma de Madrid*

Siria ante la revuelta: el blindaje del régimen

La convocatoria de un “Día de la Ira” para el 18 de marzo por parte de la desconocida plataforma Revolución Siria contra Bashar al-Asad movilizó a miles de sirios en buena parte del país. La ciudad sureña de Deraa asumió desde un principio el protagonismo y las manifestaciones fueron reprimidas con extrema dureza por las fuerzas de seguridad.

Ignacio Álvarez-Ossorio

Tema

El “efecto dominó” ha llegado a Siria. Los manifestantes exigen más libertades y el fin del Estado autoritario. El régimen sirio ha decidido blindarse considerando que las reformas no deben realizarse bajo presión popular.

Resumen

Siria se encuentra en el ojo del huracán. La revuelta que se inició en Deraa ya ha tenido réplicas en buena parte del territorio (incluida la periferia de Damasco), aunque por ahora las manifestaciones distan de ser multitudinarias y el régimen no considera amenazada su supervivencia. En su discurso ante el Parlamento, Bashar al-Asad denunció una conspiración extranjera destinada a provocar una guerra sectaria y destruir al último bastión del arabismo. Pese a descartar realizar reformas bajo la presión de la calle, el presidente ha adoptado varias medidas bien recibidas por la población, entre ellas el aumento del sueldo de los funcionarios, la liberación de algunos presos políticos, la formación de una comisión para suprimir las leyes marciales, la limitación del servicio militar obligatorio y la concesión de la ciudadanía a 250.000 kurdos del Hasake. Está por ver si estos guiños consiguen desactivar por sí solos las protestas.

Análisis

El movimiento del 18 de marzo

Tras la caída de Ben Ali, los dirigentes árabes se apresuraron a destacar las especificidades de cada uno de sus países para alejar la hipótesis de un efecto

contagio. Mubarak consideró que Egipto no era Túnez y que las movilizaciones populares no derribarían su régimen. Otro tanto ocurrió en Siria, que consideraba que otros países como Libia, Yemen o Bahrein eran mucho más vulnerables a la ola democratizadora árabe.

Los males que aquejan al mundo árabe tienen un mismo diagnóstico: el malestar popular por el deterioro de la situación económica y la perpetuación de regímenes autocráticos. Según el PNUD, una tercera parte de los 22 millones de sirios vive bajo el umbral de la pobreza. El 65% de la población siria tiene menos de 35 años y el 40% menos de 15. Cada año tratan de incorporarse al mercado laboral 200.000 personas y el sector público tan sólo es capaz de absorber a una tercera parte de ellos. Los jóvenes, además, deben hacer el servicio militar obligatorio debido al estado de guerra todavía vigente (aunque su duración se ha limitado notablemente, pasando de dos años y medio a un año y medio en los últimos 10 años).

Casi cinco décadas después del golpe de 1963, el Baaz sigue siendo el partido único. El régimen sirio no sólo es represivo (se estima que hay unos 2.500 presos políticos), sino que además ha intensificado su deriva autoritaria desde la llegada de Bashar al-Asad. Al abrigo de la liberalización económica, los prohombres del régimen han acumulado inmensas fortunas. La “mafia gobernante”, como suele denominarse popularmente la alianza clánico-familiar que rige los destinos del país, actúa con absoluta impunidad debido a su control de los principales resortes del Estado.

La convocatoria de un “Día de la Ira” para el 18 de marzo por parte de la desconocida plataforma Revolución Siria contra Bashar al-Asad movilizó a miles de sirios en buena parte del país. La ciudad sureña de Deraa asumió desde un principio el protagonismo y las manifestaciones fueron reprimidas con extrema dureza por las fuerzas de seguridad. Si bien es cierto que el motivo inicial de la protesta fue la detención de unos escolares que habían hecho pintadas antigubernamentales, también lo es que la crisis económica, acentuada por una sequía que se prolonga desde hace cuatro años, ha tenido efectos devastadores sobre la agricultura, principal fuente de riqueza de la región sureña de Hawran, multiplicando el descontento entre su población.

La mayor parte de las 121 víctimas contabilizadas hasta el momento proceden de Deraa. Otras ciudades se han sumado a la contestación, entre ellas Homs, Alepo, Hama y Qamishle, aunque es en Latakia (una zona predominantemente alawí) y en Duma (un suburbio de Damasco) donde la represión ha sido más cruenta. Las manifestaciones, que apenas han movilizado a unos pocos miles de personas, representan un desafío sin precedentes para el régimen sirio. Las sedes del Baaz, las comisarias y las tiendas de la compañía Syriatel han sufrido la ira de los manifestantes que demandan mayores libertades y critican la corrupción endémica del régimen.

En un primer momento, el gobierno acusó de la violencia a islamistas foráneos que buscaban desestabilizar el país. La televisión estatal llegó a mostrar un arsenal de armas supuestamente hallado en el interior de la mezquita de Omari en Deraa. Según la versión oficial, los disturbios formaban

parte de la guerra que el régimen libraba contra elementos *yihadistas* vinculados a los grupos Fatah al-Islam o Yund Allah, a los que se responsabiliza de una serie de acciones terroristas como el ataque a la embajada estadounidense de Damasco (2006) y el coche bomba contra una sede de los servicios de inteligencia en Sayda Zaynab (2008). El hecho de que previamente Ben Ali, Mubarak y Gadafi también hubieran descrito las movilizaciones populares como obra de al-Qaeda restó credibilidad a este argumento.

¿Es posible una guerra sectaria?

En su comparecencia ante el Parlamento el 30 de marzo, Bashar al-Asad volvió a reafirmarse en la teoría conspirativa. En su discurso, el presidente denunció que Siria hacía frente a una conspiración (*mu'amara*) destinada a provocar una guerra sectaria (*fitna*), acabar con el último bastión del arabismo y obligarle a deponer su resistencia. Además de Israel, también culpó a Qatar que, a través de *al-Yazira*, enviaría consignas a los manifestantes.

Aunque la posibilidad de que las revueltas provoquen una lucha sectaria es difícil de imaginar, la alusión presidencial a la *fitna* generó desasosiego entre buena parte de la población. Debe tenerse en cuenta que Siria es un país con una gran diversidad confesional. Si bien es cierto que los musulmanes son cerca del 90% de la población, también lo es que están fuertemente segmentados. Junto a una abrumadora mayoría suní (74% de la población) existen diferentes sectas chiíes que representan otro 16% (el 12% alawíes y el resto drusos e ismailíes). A ellos deben sumarse, al menos, un 10% de cristianos, en su mayor parte greco-ortodoxos y, en menor medida, católicos.

Las minorías confesionales han sido tradicionalmente leales al proyecto secular baazista, no sólo porque representaba un muro de contención frente a quienes demandaban la instauración de un Estado islámico, sino también porque les permitía asumir un mayor protagonismo sociopolítico. En el inconsciente colectivo todavía pesa el recuerdo de la guerra a vida o muerte que el régimen libró, entre 1979 y 1982, contra los insurrectos islamistas, que tachaban al régimen de apóstata. Debe recordarse, en este punto, que los alawíes son una secta minoritaria chíf que deifica al imam Ali y cree en la trasmigración de las almas, doctrinas que chocan de lleno con la ortodoxia islámica y que a menudo han sido tachadas de heréticas. Por eso nadie (ni el régimen ni tampoco la oposición) quiere volver a esa etapa donde la lucha por el control del Estado provocó miles de víctimas.

La otra idea repetida por Bashar al-Asad en su discurso parlamentario fue la existencia de una *mu'amara* o conspiración destinada a sembrar la inestabilidad y provocar una guerra sectaria. Detrás de esta supuesta conspiración no sólo estaría, como cabría esperar, el archienemigo israelí, sino también algunos países árabes como Qatar, cuyo emir es propietario de la cadena *al-Yazira*. Altos responsables del régimen acusaron a dicho canal por satélite de movilizar a la población contra el régimen y, en particular, al influyente telepredicador Yusuf al-Qaradawi (el mismo que se dirigió

a centenares de miles de personas desde la plaza cairota de Tahrir tras la caída de Mubarak) de azuzar a los suníes contra los alawíes desde su programa *Al-shari'a wa-l-hayat* (*La sharia y la vida*), que cuenta con 40 millones de telespectadores. La consejera presidencial Buzaina Shaaban llegó a decir: "Las palabras de Qaradawi representan una clara y directa invitación a la lucha sectaria".

Aunque tras llegar a la presidencia Bashar auspició una modernización de las estructuras administrativas y gubernamentales, pronto dejó claro que entre sus prioridades no figuraba la de introducir reformas en el ámbito político

El blindaje del régimen

Bashar al-Asad parece haber optado por blindar al régimen al percibir que su propia supervivencia podría encontrarse en peligro. En su intervención ante el Parlamento, el presidente sirio dejó claro que las reformas no serían resultado de la presión popular y que el proceso de liberalización política no era urgente: "Nos acusan de prometer reformas y no realizarlas, pero nos hemos visto obligados a modificar nuestras prioridades a causa de las reiteradas crisis regionales y de cuatro años de sequía".

Estas palabras parecen confirmar que Bashar no está dispuesto a presentar una enmienda a la totalidad y se conforma con reformas menores como el aumento del sueldo de los funcionarios (entre un 20% y 30%), medida destinada a ganarse el respaldo de un segmento significativo de la población dado que uno de cada tres trabajadores son empleados en el sector público. La dimisión del primer ministro Muhammad Naji Otri y su sustitución por Adel Safar, hasta ahora titular de Agricultura, es otra reforma cosmética en esta misma dirección.

En el Parlamento, el presidente al-Asad no hizo ninguna referencia a la batería de reformas anunciada previamente por Buzaina Shaaban, su principal consejera. Entre ellas se contemplaba la aprobación de leyes y mecanismos para combatir la corrupción, la inminente derogación de las leyes de emergencia vigentes desde 1963, la creación de una nueva legislación para acabar con el sistema del partido único, una nueva ley de prensa acorde con las aspiraciones de libertad y transparencia y, por último, el final de los arrestos arbitrarios y el fortalecimiento de las libertades públicas.

La puesta en marcha de una reforma tan ambiciosa pondría en peligro el control del Estado por la alianza clánico-familiar que dirige los destinos de Siria y que está cimentada en la asabiya o solidaridad tribal que une al clan alawí de los kalbiya. Debe tenerse en cuenta que cuando murió Hafez al-Asad en junio de 2000, el triángulo de acomodación integrado por las Fuerzas Armadas (incluidos los poderosos servicios de inteligencia o mujabarat), el Mando Regional del Partido Baaz y la oligarquía damascena

consideró que la mejor manera de preservar sus privilegios sería precisamente elegir a Bashar como sucesor instaurando una república hereditaria.

Las Fuerzas Armadas y los Servicios de Inteligencia mantienen una posición dominante sobre los otros dos actores del triángulo de acomodación. No en vano Bashar ha designado a dos personas de su absoluta confianza y de su entorno familiar para controlar, a su vez, a dos de sus cuerpos más influyentes: su hermano Maher al-Asad es el responsable de la Guardia Republicana y su primo Hafez Majluf es el jefe de la Inteligencia Militar. Los Asad, los Majluf (hijos de los hermanos de la madre de Bashar) y los Shalish (hijos de la tía paterna del presidente) conforman la triada que dirige la vida política, militar y económica del país. Todos ellos se han enriquecido notablemente en las últimas décadas y son los principales beneficiados de la liberalización económica registrada en el país. Probablemente el caso más conocido, aunque no el único, sea el de Rami Majluf, el primo de Bashar que controla la compañía de telefonía móvil Syriatel, las tiendas libres de impuestos de los aeropuertos, un importante conglomerado de medios de comunicación y la principal cementera del país.

Al rechazar de plano las demandas de reforma, el régimen sirio se arriesga a exacerbar el malestar popular

El Baaz, que es el “partido líder en el Estado y la sociedad” según el artículo 8 de la Constitución, ha perdido buena parte de su influencia, aunque sigue siendo la columna vertebral del Frente Nacional Progresista, el partido único en el que también tienen una presencia residual elementos comunistas y *naseristas*. El FNP controla dos terceras partes del Parlamento, quedando el tercio restante en manos de independientes (sobre todo hombres de negocios, pero también algunos islamistas moderados denigrados por la oposición islamista que los considera ‘ulemas de palacio’). Una nueva ley de partidos, como la prometida por Shaaban, permitiría la instauración de un sistema pluripartidista y pondría fin al anacrónico sistema monopartidista vigente en la actualidad.

Aunque tras llegar a la presidencia Bashar auspició una modernización de las estructuras administrativas y gubernamentales, reemplazando a la vieja guardia por una nueva guardia más tecnocrática y menos ideologizada, pronto dejó claro que entre sus prioridades no figuraba la de introducir reformas en el ámbito político. En su reciente discurso parlamentario, el presidente volvió a insistir en la misma cuestión: “Decimos a quienes piden reformas que nos retrasamos en su aplicación, pero pronto las comenzaremos. Las prioridades son la estabilidad y la mejora de las condiciones económicas”.

Las Fuerzas Armadas y los Servicios de Inteligencia han quedado al margen de esta renovación generacional y

han conservado su tradicional función de guardianes de la revolución baazista. Por eso no nos debe extrañar que este núcleo duro del régimen haya conseguido imponer sus concepciones a la hora de sofocar las revueltas. En Siria debe descartarse por completo un escenario similar al tunecino o al egipcio en el que las tropas se negaron a reprimir las manifestaciones, hecho que precipitó la caída de Ben Ali y Mubarak. El Baaz conquistó el poder en Siria gracias a un golpe militar y, desde entonces, los militares han gobernado el país con mano de hierro. En estas cinco décadas, las Fuerzas Armadas han acumulado un poder prácticamente ilimitado al que no renunciarán fácilmente.

¿Triunfará la revolución popular siria?

Al rechazar de plano las demandas de reforma, el régimen sirio se arriesga a exacerbar el malestar popular. Por ahora la revuelta tiene tres focos – Deraa, Latakia y Duma –, pero podría extenderse al conjunto del territorio en el caso de que el régimen se niegue a hacer frente a las demandas populares y siga recurriendo a la violencia para frenar las manifestaciones.

Una de las principales incógnitas por despejar es saber quién está detrás de la revuelta y si existe un mando unificado que la dirija. Hasta el momento todo lo que rodea a las manifestaciones populares está rodeado de una densa nebulosa. Las informaciones llegan con cuentagotas y, en ocasiones, son contradictorias. La plataforma Revolución Siria contra Bashar al-Asad, radicada en el exilio, difunde informaciones, llamamientos y videos a través de la red social Facebook, a la vez que convoca días de la ira, la dignidad o los mártires cada viernes. También la cadena qatarí *al-Yazira* despliega una importante actividad al cubrir los acontecimientos y servir de amplificador frente a las peticiones de la oposición al régimen.

Desde que se iniciara la revuelta, la sociedad civil siria ha cobrado un especial protagonismo y, de manera particular, algunas de sus principales organizaciones como el Foro Cultural para los Derechos Humanos, el Foro Yamal al-Atassi para el Diálogo Democrático, el Comité para el Resurgimiento de la Sociedad Civil y el Foro para el Diálogo Nacional. Las reivindicaciones de la sociedad civil fueron recogidas en su día en el Manifiesto de los 99 (2000): la derogación del estado de emergencia y la ley marcial vigentes desde 1963, una amnistía general para todos los presos políticos, el retorno de los exiliados, el imperio de la ley, el pluralismo político y la libertad de asociación, de prensa y de expresión. La Declaración de Damasco (2005) reclamó, por su parte, el establecimiento de un gobierno plenamente democrático, la supresión de la ley marcial y la plena igualdad de todos los ciudadanos independientemente de su etnia (en una clara alusión a la minoría kurda). Más importante aún: unificó a las principales fuerzas opositoras (incluidos los Hermanos Musulmanes), en torno a un programa basado en la no violencia, la democracia y el cambio político.

Otro de los actores que podría desempeñar un papel central en el caso de que se sume a las protestas contra el régimen es el kurdo, aunque la decisión de naturalizar

a 250.000 kurdos, adoptada el 5 de abril, podría diluir dicha posibilidad. El hecho de que una décima parte de la población de la República Árabe Siria, como oficialmente se la denomina desde 1961, sea precisamente no árabe representa una evidente paradoja. La minoría kurda en Siria cuenta con una larga historia de persecuciones y de ostracismo político, social y económico, debido a que es la única comunidad étnica no árabe que podría representar una amenaza para el proyecto panarabista baazista. Hasta ahora, 175.000 kurdos carecían de nacionalidad y, por lo tanto, eran considerados extranjeros en su propio país sin poder tener propiedades o desempeñar aquellas labores que exigieran la pertenencia a un colegio profesional (abogado, periodista, ingeniero o médico). Otros 75.000 kurdos figuraban como no registrados, por lo que no tenían siquiera acceso a la educación o a la sanidad. Ahora la situación ha cambiado. Esta primavera, por primera vez, los kurdos del Hasake han podido celebrar la llegada del año nuevo kurdo –el Niruz– sin ningún tipo de trabas (lo que contrasta con lo ocurrido en 2004 cuando más de 40 kurdos perdieron la vida por la represión policial).

Un tercer elemento a tener en cuenta es el movimiento islamista. No debe pasarse por alto que las manifestaciones se celebran los viernes, arrancan en las mezquitas y tienen como lema “Dios, Siria y libertad”. El hecho de que un país como Siria tenga presidentes alawíes desde hace más de cuatro décadas ha generado un profundo malestar entre la mayoría suní, tradicional depositaria de la autoridad desde la época omeya, y también entre los sectores islamistas, enemigos del Estado secular. De hecho, durante la insurrección islamista registrada en los 80, los alzados convocaron una *yihad* contra los apóstatas. El bombardeo de Hama puso fin a la presencia de los Hermanos Musulmanes en el país y, desde entonces, la militancia en dicha organización está estrictamente prohibida. La Ley 49/1980 señala: “Todo aquel que pertenezca a los Hermanos Musulmanes es considerado un criminal que recibirá como castigo la pena de muerte”. Debido a esta situación, la mayor parte de los dirigentes islamistas viven en el exilio desde hace más de tres décadas y, por lo tanto, tienen una limitada capacidad de influir en los actuales acontecimientos.

¿Quiere decir ello que los islamistas están neutralizados? No necesariamente. Como en el resto de países árabes, Siria ha experimentado un intenso proceso de islamización tanto del espacio público como del privado en las últimas décadas. Como recuerda Paulo Pinto, tras la represión de Hama se registró “un claro giro de la población suní desde un proyecto socio-político articulado, centrado en la conquista del estado, hasta la intensificación de la exposición pública de los signos individuales de piedad y religiosidad, como las visitas a la mezquita o el empleo del velo, como práctica individual”.

Para tratar de frenar el proceso de islamización de la sociedad, el régimen baazista ha tratado de imponer un riguroso control sobre el islam oficial fomentando, al mismo tiempo, el islam popular. Bashar, como hiciera su padre, ha cooptado a las asociaciones sufíes o *yama'at*, y en particular la Naqsabandiya. Aunque es cierto que esta

esponsorización ha impedido la penetración del salafismo, no ha logrado detener la islamización. Al menos el régimen puede felicitarse de que los clérigos más importantes del país, entre ellos el gran muftí, Ahmad Hassun, y el imam de la mezquita de los Omeyas, Said Ramadan al-Buti, hayan condenado de manera enérgica las manifestaciones. Para tratar de apaciguar a los sectores islamistas, el régimen también ha realizado una serie de gestos en las últimas semanas entre los que destaca la derogación del decreto que prohibía el empleo del *niqab* o velo integral entre las profesoras y alumnas de las instituciones educativas sirias.

El futuro del régimen sirio dependerá, de una parte, de quién gane el pulso que libran los sectores inmovilistas y reformistas y, de otra parte, de que surja un liderazgo capaz de canalizar el descontento popular y extender la revuelta al conjunto del territorio

El gran juego sirio

La comunidad internacional se ha inclinado por esperar y ver en lugar de actuar. Debe tenerse en cuenta que Siria es un régimen hermético con escasas relaciones con los países occidentales. Las relaciones con EEUU distan de ser ejemplares y, aunque se ha registrado una ligera mejoría en el curso de los últimos años al reconocer Washington el peso específico de Damasco en la región, la Administración Obama se sigue guiando en gran medida por la Doctrina Bush recogida en la Ley de Responsabilidad Siria. Por lo que respecta a la UE es Francia, como ex potencia mandataria, la que ha marcado la política a seguir hacia Siria, decretando su aislamiento tras el asesinato de Hariri y rehabilitándola con su entrada en la Unión para el Mediterráneo.

Ni Washington ni Bruselas tienen, por lo tanto, capacidad para presionar al régimen ni tampoco pueden adoptar la estrategia del palo y la zanahoria, que tan escasos resultados les ha dado en el pasado. Además, Damasco sigue conservando la capacidad para interferir en los asuntos libaneses y, en consecuencia, desestabilizar el país vecino a través del patronazgo que ejerce sobre Hezbolá, algo que preocupa a Francia y a EEUU. En este sentido, es probablemente Teherán el actor que más capacidad tiene para influir en las decisiones del régimen debido a la alianza estratégica vigente desde hace tres décadas. Irán no es partidario de una apertura política en Siria, ya que considera que las reformas podrían alejarlo de la esfera iraní. No debería subestimarse, por último, el efecto que puedan ejercer las presiones del primer ministro turco Erdogan para que Bashar ponga en marcha reformas de calado, dado que Ankara ha multiplicado sus relaciones comerciales y económicas con Siria en el curso de la última década.

Si bien es cierto que Turquía ha ganado peso entre los sectores reformistas sirios, también lo es que Irán mantiene

una relación mucho más estrecha con el núcleo duro del régimen y, de manera particular, con las Fuerzas Armadas. No debe extrañar, pues, que los consejos de Erdogan en torno a la necesidad de reformas profundas hayan caído, al menos por el momento, en saco roto. No en vano, también la secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton, animó a Bashar a emprender reformas, lo que generó la alarma de Irán, puesto que Siria es su principal aliado estratégico y un actor esencial para mantener su influencia sobre Líbano a través de Hezbolá. No menos paradójico es que Israel observe también con alarma las movilizaciones populares y que las considere una amenaza para sus propios intereses, dado que un cambio de régimen podría obligar a replantear las relaciones bilaterales y acabar con la situación de ni paz ni guerra vigente desde hace cuatro décadas.

Conclusión

Pese a haber aludido a la existencia de una conspiración extranjera destinada a provocar una guerra sectaria, Bashar al-Asad es plenamente consciente que debe introducir reformas de calado si quiere garantizar la supervivencia del régimen sirio. La ola democratizadora árabe, que por ahora ha tenido más éxito en los países norteafricanos árabes que en el Oriente Próximo, llegará tarde o temprano a Siria. Ante ella, el régimen sirio sólo tiene dos opciones: librar una lucha a vida o muerte contra los manifestantes o, por el contrario, tratar de reformarse desde dentro asumiendo las demandas de la población (derogación de las leyes de emergencia, fin del sistema de partido único, liberación de los presos políticos y libertad de expresión). El futuro del régimen sirio dependerá, de una parte, de quién gane el pulso que libran los sectores inmovilistas y reformistas y, de otra parte, de que surja un liderazgo capaz de canalizar el descontento popular y extender la revuelta al conjunto del territorio.

Ignacio Álvarez-Ossorio

Profesor de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de Alicante y autor de "Siria contemporánea" (Síntesis, 2009) y del blog "Próximo Oriente" (<http://www.proximooriente.blogspot.com/>)

Tema

Una variable fundamental de la función de estabilidad social a corto y medio plazo de los países árabes mediterráneos, de Marruecos a Siria, es la situación del empleo y las políticas de empleo. Y dicha variable dependerá mucho de la oferta que la UE haga a esos países.

Resumen

Existe un amplio consenso acerca de que una de las principales causas de las recientes revueltas contra los regímenes políticos en Túnez y en Egipto fue el malestar de la población ante el deterioro de las condiciones de vida y de las perspectivas económicas. La falta de perspectivas de empleo para los jóvenes, en particular, fue una de sus principales motivaciones para echarse a la calle en Túnez o en Egipto y exigir el cambio de régimen y, con él, el cambio de política económica. Sin embargo, en el nuevo escenario surgido tras la caída de los regímenes tunecino y egipcio, toda la atención se está poniendo en la reforma política y la transición democrática, sin un debate ni un análisis sobre las políticas económicas necesarias para garantizar la estabilidad. La UE, que por su proximidad y su fuerza de gravitación tiene una influencia determinante en las opciones económicas de estos países, debe elegir entre dos opciones. Por un lado, una simple reorientación de su asistencia hacia el acompañamiento del proceso de democratización y, por otro, el replanteamiento radical de su oferta a la región y, con ella, del modelo de sus relaciones económicas con el Mediterráneo.

Análisis

Revueltas y empleo

El viernes 14 de enero de 2011 pasará a la historia por ser el día en que Zine El-Abidine Ben Ali abandonó el país y se inició el proceso de transición a la democracia en Túnez, una auténtica segunda independencia. Pero entre el maremágnum de noticias que rodearon ese momento, los saqueos y los ataques a emblemas de la familia del presidente, pasó inadvertido que el día anterior, en el momento álgido de las revueltas, 24 oficinas públicas de empleo habían sido quemadas en todo el país y dos más ocupadas por jóvenes airados. Esta ira de los manifestantes contra las delegaciones físicas de la política de empleo del régimen evidencia una de las principales causas del descontento de la población y, sobre todo, de los jóvenes que protagonizaron las revueltas: la falta de empleo y de perspectivas económicas.

Un repaso rápido de algunas cifras justifica esa centralidad del empleo: sobre una población total de 180 millones de personas en los ocho países árabes mediterráneos (de Marruecos a Siria, excluida Libia), tan sólo 50 millones tienen un empleo, es decir, menos del 30% de la población total y menos del 45% de la población en edad de trabajar (en España, esa cifra es del 60%). Los salarios medios apenas superan los 100 euros mensuales en Egipto, no

Empleo y políticas de empleo en el Norte de África: de causas de las revueltas a claves de la transición

En los próximos 10 años, simplemente para absorber el aumento de la población en edad de trabajar, es decir, la llegada al mercado laboral de las cohortes de jóvenes que ahora tienen entre cinco y 15 años, sin que aumente el número de desempleados actuales, será necesario crear más de 15 millones de empleos adicionales en la región.

Iván Martín

llegan a los 150 en Siria y están por debajo de los 300 euros en Marruecos y Argelia (en Túnez el salario mínimo legal, que actúa como techo salarial efectivo en el sector informal, es de 139 euros). Las tasas de desempleo, que no son muy significativas debido a la elevada tasa de inactividad, afectan sobre todo a los jóvenes y a las mujeres (sólo una de cada cinco mujeres en edad de trabajar forma parte de la población activa). Además, paradójicamente, aumentan con el nivel de educación, de modo que el desempleo de los licenciados universitarios se ha convertido en un gran problema político en casi todos los países de la región.

Las perspectivas a medio plazo son aún más inquietantes (véase la Tabla 1). En los próximos 10 años, simplemente para absorber el aumento de la población en edad de trabajar, es decir, la llegada al mercado laboral de las cohortes de jóvenes que ahora tienen entre cinco y 15 años, sin que aumente el número de desempleados actuales, será necesario crear más de 15 millones de empleos adicionales en la región. Eso supone entre un 30% y un 60% más que el empleo creado durante los años de elevado crecimiento económico registrado entre 2002 y 2007.

El diagnóstico está hecho. En el citado estudio de 2010 de la Comisión Europea se subrayaba que “es necesario actuar de inmediato, porque el *statu quo* en materia de empleo corre el riesgo de provocar daños irreparables a las perspectivas de

Tabla 1. Estimación de las necesidades anuales de creación de empleo hasta 2020 (1)

	Marruecos	Argelia	Túnez	Egipto	Palestina	Jordania	Libano	Siria	Total
Brasil	180.000	225.100	84.600	715.526	45.977	53.501	15.000	221.000	1.540.704

(1) Bajo los supuestos de mantenimiento de las tasas de participación en la población activa y del número de desempleados.

Fuente: Estudio "Labour Market Performance and Migration Flows in Arab Mediterranean Countries: Determinants and Effects", Comisión Europea, 2010, http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2010/op60_en.htm.

desarrollo de estos países”, creando “tensiones en su tejido social que podrían afectar gravemente a la cohesión y la estabilidad social en la región, incrementando las presiones migratorias”. El propio Fondo Monetario Internacional asumía poco después el mismo lenguaje y en octubre de 2010 sostenía que “cada vez está más claro que la región no puede permitirse el *statu quo*” en relación con sus mercados de trabajo (*Regional Economic Outlook. Middle East and Central Asia*, p. 37). En la misma línea apunta la reciente Comunicación de la Comisión Europea del 8 de marzo de 2011 en la que se propone una “Asociación para la democracia y la prosperidad compartida con el sur del Mediterráneo”.¹ En ella, la Comisión reconocía que “los disturbios en varios países del sur del Mediterráneo están claramente vinculados con las debilidades económicas. Muchas de estas economías se caracterizan por una distribución desigual de la riqueza, reformas económicas y sociales insuficientes, escasa creación de empleo, sistemas educativos y de formación profesional muy débiles que no producen las cualificaciones requeridas por el mercado de trabajo y un nivel muy bajo de integración comercial regional”.

Aunque ya preocupantes con anterioridad a la crisis actual, lo cierto es que a corto plazo las revueltas han deteriorado las perspectivas económicas de los países del Norte de África y, por tanto, su capacidad para acometer una política social y de empleo más consistente

Empeoramiento de las perspectivas económicas

Aunque ya preocupantes con anterioridad a la crisis actual, lo cierto es que a corto plazo las revueltas han deteriorado las perspectivas económicas de los países del Norte de África y, por tanto, su capacidad para acometer una política social y de empleo más consistente. Tanto el turismo como las inversiones extranjeras se están resintiendo gravemente del aumento de la inestabilidad y de la incertidumbre y tardarán en recuperarse. También las exportaciones han sufrido un severo retroceso. El nuevo ministro de Hacienda egipcio estimaba en dos puntos porcentuales la rebaja del crecimiento directamente causada por las revueltas en 2011, y las autoridades tunecinas estiman la caída del crecimiento en entre dos y tres puntos porcentuales. Las agencias de calificación crediticia no han tardado en revisar las “notas” de la deuda externa de Túnez y

de Egipto: la agencia Moody’s rebajó la calificación de Túnez el 19 de enero y el 31 de enero las tres grandes agencias de calificación (Moody’s, Standard & Poor’s y Fitch) hicieron lo propio con Egipto “ante el aumento del riesgo político”. La apertura de la Bolsa de Valores de El Cairo tras 55 días de suspensión, el 23 de marzo, provocó la peor caída de su historia, un desplome del 8,9% que se acumula al 16% que ya había perdido en la semana anterior a su cierre. Otros países de la región, como Marruecos, Jordania y Argelia, ya se están resintiendo también.

Por otro lado, la presión sobre la política económica ha aumentado mucho. El éxito de las movilizaciones populares y la eclosión de unas reivindicaciones largamente reprimidas están provocando una proliferación de huelgas y movilizaciones reclamando mejoras salariales en ambos países, y muchas empresas se han visto obligadas ya a duplicar o triplicar los salarios. Los trabajadores y ciudadanos de esos países no sólo aspiran a “disfrutar de las mismas libertades que nosotros [los europeos] damos por sentadas”, como se señala en la Comunicación de la Comisión antes citada, sino que también aspiran a compartir nuestro nivel de vida y de desarrollo.

Ahora bien, objetivamente, dichas movilizaciones operan como factor de disuasión para la inversión extranjera y la iniciativa empresarial. Más aún, la falta de un liderazgo sólido y de una buena vertebración de las reivindicaciones por parte de sindicatos y otras organizaciones sociales se traduce en una falta de mecanismos de contención de las demandas corporativistas de los distintos sectores en el marco de un pacto económico y social más amplio a escala nacional. Tal marco permitiría acometer la reconstrucción económica sobre unas bases sólidas y equitativas.

Los gobiernos de la región son conscientes de la importancia del empleo en el nuevo contexto. Por ejemplo, en Marruecos, el gobierno no tardó ni una semana tras la caída del régimen tunecino en ceder a las movilizaciones de los licenciados en paro y anunciar que les reservaría 1.880 puestos de libre designación en la Administración, sin concurso ni oposición. El nuevo ministro de Empleo tunecino, pese a denunciar el intento de Ben Ali de congradarse con la población anunciando por televisión la creación de 300.000 empleos en dos años sólo tres días antes de abandonar el país, tiene previsto habilitar a 14.000 nuevos funcionarios y se propone crear de inmediato la figura del contrato en prácticas en la Administración pública para 10.000 licenciados en paro, además de un amplio plan de obras públicas cuyo principal objetivo es mantener la actividad económica y crear empleo a corto plazo (*Le Monde*, 21/III/2011). Por su parte, Siria anunció el 20 de marzo la creación de 63.000 empleos más en el sector público, con un

¹ http://www.eeas.europa.eu/euromed/docs/com2011_200_en.pdf.

coste de 18.000 millones de dólares. Pero ninguna de esas medidas aporta una solución estructural al problema del desempleo ni conseguirá apaciguar las demandas sociales de mejoras salariales y acceso al empleo. Al contrario, tales medidas imponen de hecho una carga futura al presupuesto del Estado que puede acabar desviando recursos de las inversiones públicas y el gasto social o educativo.

También la UE es consciente del reto del empleo y de su interdependencia con los países mediterráneos. En su Declaración del 11 de marzo de 2011, el Consejo Europeo señalaba que “el desarrollo económico y las perspectivas de empleo, especialmente para los jóvenes, son de una importancia capital para estabilizar la democracia”.² La propia Comisión Europea, en su Comunicación del 8 de marzo de 2011, tras observar que los acontecimientos en curso en la vecindad sur “tendrán consecuencias duraderas no sólo para los pueblos y los países de la región, sino también para el resto del mundo, y en particular para la UE”, insistía en que todo lo realizado hasta ahora “debería ir acompañado por políticas sociales y de empleo integradas, que incluyan la articulación entre las iniciativas de formación profesional y las necesidades del mercado de trabajo, el diálogo social, la provisión de redes de seguridad social y la transformación del sector informal”. Lo que no indicaba es cómo se propone contribuir a esos objetivos.

Función de estabilidad social: la clave europea

El hecho es que la función de estabilidad social en el Norte de África parece estar infradeterminada: en las circunstancias actuales, no hay una fórmula que permita compatibilizar el trinomio formado por las reformas necesarias, la mejora de la competitividad en un entorno de globalización económica y la satisfacción de las expectativas legítimas de la población (trabajo decente, condiciones de vida dignas y convergencia progresiva con los niveles de vida de la UE). Los regímenes anteriores optaron, con el apoyo de la UE, por las dos primeras, obviando el umbral de sostenibilidad social y acumulando así la frustración de amplios segmentos de la población. Los riesgos de emergencia de opciones populistas son evidentes en un contexto que combine apertura económica con baja competitividad –y por tanto la exclusión de regiones y grupos sociales enteros– y elecciones democráticas.

En este contexto, la oferta económica que haga la UE a los países mediterráneos puede servir de clave para asegurar la cohesión y encontrar una solución a dicha ecuación que contribuya a reforzar la transición política y no la socave. Así sucedió en las sucesivas ampliaciones europeas, y en cierta medida está sucediendo en Turquía y en los Balcanes. Dicha oferta debe articularse en dos planos, uno genérico en relación con el modelo de relaciones económicas entre el norte y el sur del Mediterráneo y otro más específico sobre las políticas de empleo.

“Prosperidad compartida”

La rapidez de los cambios de régimen, al menos en Túnez y Egipto, junto con el protagonismo en las revueltas de los jóvenes –más que de los movimientos sindicales y sociales de oposición organizados– y las expectativas sociales ante el nuevo contexto político hacen muy improbable que los países árabes mediterráneos puedan superar por sí solos la espiral de demandas sociales y corporativas, la mayor inestabilidad que se deriva de ellas y el consiguiente deterioro de las perspectivas económicas. Ante este escenario, una de las pocas alternativas para estabilizar la situación y ofrecer un panorama de mejora que contenga las reclamaciones sociales a corto plazo puede venir de las perspectivas de integración en el espacio económico europeo. Curiosamente, sólo los ministros de Asuntos Exteriores de Dinamarca y de los Países Bajos han subrayado en las últimas semanas la importancia de esta vía (véase el artículo conjunto publicado en *European Voice*, 24/III/2011).

La oferta económica que haga la UE a los países mediterráneos puede servir de clave para asegurar la cohesión y encontrar una solución a dicha ecuación que contribuya a reforzar la transición política y no la socave

Esta alternativa requeriría que la UE ofreciera un paquete de medidas económicas a corto y medio plazo bien moduladas y ligadas a avances en el proceso democrático que fuera capaz de cambiar de manera determinante las perspectivas económicas de estos países, algo que ni la Unión para el Mediterráneo (UpM) ni la Política Europea de Vecindad (PEV) han conseguido hasta ahora. Un cambio así sólo puede conseguirse si la UE les ofrece un conjunto de incentivos económicos equiparable al que ofrece a los países candidatos a la adhesión, es decir:

- (1) Plena apertura del mercado interior europeo (incluida la liberalización agrícola, administrada hasta ahora en dosis homeopáticas), con perspectivas incluso de una integración a medio o largo plazo en los mecanismos de la Política Agrícola Común.
- (2) Un horizonte inequívoco de libre movilidad de personas como el que ofreció ya a los países del Este de Europa, de Ucrania a Georgia, en la Declaración del Consejo Europeo de mayo de 2009, en la que se creó la Asociación Oriental.
- (3) Un aumento sustancial de la asistencia financiera acorde con el objetivo de convergencia económica real, pero también una reorientación de la misma en función de dicho objetivo, algo que la UE tiene perfectamente ensayado mediante el instrumento de los fondos estructurales de la Política Regional, diseñados específicamente para promover la cohesión y el “desarrollo de las regiones más pobres” (otro de

² http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/es/ec/119784.pdf.

los objetivos enunciados por la Comisión en su nuevo enfoque hacia los países del Sur).³

Se trata, ni más ni menos, de retomar el modelo de integración que la UE ha utilizado con éxito como instrumento de modernización y transformación de sus vecinos. Es decir, de recuperar la filosofía original de la PEV (“todo menos las instituciones”), un modelo que evidentemente debería plantearse en un formato modulable y ser ofrecido también a los países de la vecindad Este. La aplicación de este modelo serviría, además, para acelerar el proceso histórico de ampliación de la esfera de influencia de la UE que la caracteriza desde su propia creación en 1958, y contribuir a la creación de un bloque económico regional potente que refuerce a Europa en el marco del proceso de globalización, integrando su periferia menos desarrollada.

Se trata, ni más ni menos, de retomar el modelo de integración que la UE ha utilizado con éxito como instrumento de modernización y transformación de sus vecinos

Si la UE es capaz de sobreponerse a su propia parálisis política y de diseñar un paquete de estas características, no sólo estará ante un proyecto capaz de relanzar la propia integración europea, como lo fueron en su día el mercado interior, la moneda única o la ampliación, sino que convertiría las relaciones económicas con sus vecinos mediterráneos en un vector de superación de la crisis económica actual. Desde el punto de vista de los países mediterráneos y su proceso de transición, un horizonte claro de plena integración en el espacio económico europeo podría actuar como fuerza moderadora de las demandas sociales a corto plazo y contribuiría a centrar los esfuerzos de los agentes sociales en el diseño y la aplicación de las reformas políticas y económicas necesarias, y no en la obtención de réditos corporativistas a corto plazo. La propia condicionalidad inherente a una oferta de esta naturaleza contribuiría a responsabilizar a los agentes sociales, que tendrían fuertes incentivos para renunciar a conquistas individuales o corporativistas a corto plazo a cambio de avances colectivos significativos a medio y largo plazo, so pena de perder su legitimidad. En esencia, esa fue la ecuación de estabilidad, reforma y progreso social que impulsó el desarrollo de España en la segunda mitad de los años 70 (con los Pactos de la Moncloa, que presuponían una función de demandas sociales bien articulada por sindicatos y partidos políticos), los 80 (con la perspectiva de la entrada en la Comunidad Europea, que facilitó por ejemplo el difícil proceso de reconversión industrial) y los 90 (las transferencias recibidas del presupuesto comunitario permitieron acometer prácticamente sin oposición social la gigantesca operación de ajuste macroeconómico previa a la entrada en el euro, con

unas consecuencias sociales sumamente duras).

La actual situación en Libia, con los costes de la operación militar (que superan ya a los compromisos europeos de ayuda adicional a la región) y la gestión de los flujos migratorios sobrevenidos ofrecen una pista sobre el coste de las alternativas a esta visión de integración euromediterránea.

“Políticas de empleo integradas”

La otra clave para impulsar un desarrollo económico y social compatible y simultáneo con el proceso de democratización en el Norte de África es el desarrollo de la dimensión social de la cooperación euromediterránea, tanto bilateral como multilateral.⁴

En el plano bilateral, es preciso impulsar en los países mediterráneos políticas nacionales de empleo bien definidas. Tales políticas nacionales deberían incluir políticas activas eficaces para facilitar la transición de los jóvenes entre el sistema educativo y la vida laboral y la integración de las mujeres en el mercado de trabajo. También son fundamentales unos servicios públicos de empleo concebidos desde la perspectiva de la cohesión territorial y la prestación de servicios de apoyo a los desempleados, y de intermediación tanto interna como internacional. Por último, dichas políticas deberían estar igualmente articuladas con unas políticas industriales activas que impulsen la creación de empleo cualificado en la región, uno de los eslabones débiles del proceso de modernización económica de estos países (cuyo nivel de industrialización se redujo entre 1970 y 2007, según el Informe sobre Desarrollo Humano Árabe 2009). En este sentido, la UE y los Estados miembros pueden prestar una preciosa asistencia técnica y financiera en ambos ámbitos, como han hecho en el ámbito de la política comercial o macroeconómica.

Igualmente, las políticas de empleo deberían cobrar protagonismo en el marco de la aplicación de la PEV y todos sus instrumentos (planes de acción, apoyo presupuestario, hermanamientos, cooperación transfronteriza, etc.). Para ello, habría que empezar por el reforzamiento institucional de los ministerios de Empleo y sus capacidades de definición de políticas. La reactivación de los acuerdos de migración legal entre la UE y los países mediterráneos contribuiría igualmente a mejorar las perspectivas de los mercados de trabajo en estos últimos y a visualizar la voluntad europea de integración efectiva de los países mediterráneos, con todas sus consecuencias.

En el plano multilateral, hasta el año 2007 el empleo, pese a ser ampliamente reconocido como el principal reto económico y social de la región, estuvo prácticamente ausente de la cooperación euromediterránea, salvo un pequeño programa regional de reforzamiento de los sistemas de formación profesional. Desde entonces la situación ha mejorado sensiblemente. En 2008 y 2010 se organizaron sendas conferencias ministeriales euromediterráneas de empleo (la más reciente, en Bruselas en noviembre de 2010, fue la última conferencia ministerial de la UpM hasta

³ Sobre la lógica y las posibilidades de extensión de los fondos estructurales a los países mediterráneos, véase Iván Martín (2009), “Perspectives financières 2014-2020: Quels instruments financiers pour la Méditerranée?”, en: Europe-Méditerranée. Enjeux, Stratégies, Réformes, Monographies méditerranéennes n° 7, IEMed, Barcelona, p. 48-57, <http://www.iemed.org/publicacions/detalls/monografia7/5.pdf>

⁴ Véase Iván Martín (ed.), 20+10: 30 propuestas para desarrollar una verdadera dimensión social en la Asociación Euromediterránea, Casa Mediterráneo, Friedrich Ebert Stiftung y Plataforma No-Gubernamental Euromed, Alicante, 2010, <http://casa-mediterraneo.es/wp-content/uploads/2010/10/20+10.zip>.

la fecha) y en ellas se acordó un “Marco de Acciones en materia de empleo, empleabilidad y trabajo decente” para el conjunto de la región.⁵

Pero, aunque “la aplicación del Marco de Acciones integrado aprobado en Marrakech [en la conferencia ministerial de 2008] se ha hecho aún más urgente ante la presión de la crisis del empleo y la necesidad de recuperación”, y cabría decir que aún más tras las recientes revueltas, lo cierto es que hasta ahora no ha pasado de la retórica voluntarista. Sin embargo, los nueve ejes de actuación contemplados en el Marco de Acciones constituyen la osatura de una auténtica Estrategia Euromediterránea de Empleo. Además, en términos de metodología, los ministros se inspiran claramente, a la hora de diseñar el “diálogo regional en materia de empleo”, en el Método Abierto de Coordinación de supervisión multilateral de políticas ampliamente ensayado ya en el seno de la UE. Se trata del mecanismo de coordinación previsto entre los Estados Miembros en aquellos casos en que las instituciones comunitarias no tienen competencias propias, como sucede en el ámbito de las políticas sociales y de empleo, y estaría implícitamente basado en el reconocimiento de que el empleo en la región mediterránea, y, por consiguiente, las políticas de empleo de todos los países mediterráneos, son una cuestión de interés común (interdependencia). Ello entrañaría lógicamente, de acuerdo con el método comunitario, un cierto “derecho de información” de todos los socios sobre dichas políticas, la definición de estrategias conjuntas y, en última instancia, la mutualización de los recursos para ponerlas en práctica.

Para ello, sería necesario operacionalizar dicho Marco de Acciones, estableciendo calendarios de aplicación y movilizandolos recursos específicos y otorgando un mayor protagonismo de supervisión técnica a la Comisión Europea para impulsar y gestionar el proceso, tarea hasta ahora encomendada a un Grupo de Trabajo de expertos que se reúne únicamente una vez al año. Por esta nueva fase, habría que convocar una nueva conferencia ministerial (la próxima no está prevista hasta finales de 2012) con aquellos países europeos y mediterráneos dispuestos a participar en una nueva “Estrategia Euromediterránea de Empleo”, que idealmente debería incluir también aspectos migratorios.

Otro vector complementario, aunque más exigente, sería ofrecer a los países asociados mediterráneos más avanzados (por ejemplo, en el marco del “estatuto avanzado”) la posibilidad de integrarse plenamente en la dinámica de la Estrategia Europa 2020 (“Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador”),⁶ aprobada por la UE en junio de 2010 y que articulará todas las acciones comunitarias en materia de crecimiento, competitividad y empleo durante los próximos 10 años, así como el uso de los fondos estructurales durante el próximo período presupuestario 2014-2020. La Estrategia Europa 2020 se propone como una hoja de ruta para aumentar a largo plazo la competitividad de las economías europeas

y preservar el modelo social europeo (“¿Dónde queremos que esté Europa en 2020?”) en torno a los siguientes ejes: empleo, innovación y competitividad; cambio climático; y educación y lucha contra la pobreza. Un análisis detallado pone de manifiesto que en realidad existe un alto grado de solapamiento de objetivos entre la Estrategia Europa 2020 y las diferentes capas de la cooperación UE-Mediterráneo y, por consiguiente, que es perfectamente viable plantear una Estrategia Europa-Mediterráneo 2020 en el ámbito del crecimiento y del empleo.⁷ La integración de los países del sur del Mediterráneo en su espacio económico haría a Europa más competitiva.

España tiene un papel sumamente importante, no sólo por su implicación directa en la región como país mediterráneo y su mayor exposición comercial, sino por su propia experiencia de transición democrática y desarrollo económico y, más recientemente, por la gestión de un modelo migratorio que ha conseguido integrar cuatro millones de inmigrantes laborales

Eso sí, esta redefinición de las políticas de empleo y de las prioridades de la cooperación económica euromediterránea debe llevar aparejado un replanteamiento del modelo económico auspiciado por la UE y las instituciones financieras internacionales en la región. Dicho modelo se ha centrado hasta ahora en el ajuste macroeconómico, la liberalización y la competitividad (bajos salarios, bajos impuestos, baja regulación), sin tener en cuenta las consecuencias sociales de esas políticas ni la prioridad del empleo, no sólo como mecanismo de integración económica de la mayor generación de jóvenes de la historia de estos países, sino como condición necesaria para la estabilidad en una sociedad democrática.

Una oportunidad para España

En este contexto, España tiene un papel sumamente importante que desempeñar, no sólo por su implicación directa en la región como país mediterráneo y su mayor exposición comercial a los socios mediterráneos,⁸ sino por su propia experiencia de transición democrática y desarrollo económico y, más recientemente, por la gestión de un modelo migratorio que ha conseguido integrar sin excesivas tensiones cuatro millones de inmigrantes laborales en una década.

La transición española está considerada como un modelo ejemplar, precisamente por la conjugación del proceso de democratización con la implantación del Estado de Bienestar (que sentó las bases de un reparto más equitativo de la riqueza y sobre todo de la reducción de la exclusión social)

⁵ <http://www.ilo.org/public/english/region/eurpro/brussels/downloads/employment.pdf>.

⁶ Comunicación de la Comisión Europea COM(2010) 2020 final, 3/III/2010, http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/documents/pdf/20100303_1_es.pdf.

⁷ Iván Martín (2010): “La Estrategia Europa 2020 y el Mediterráneo: retos y perspectivas para la cooperación territorial”, documento de trabajo, Proyecto Medgovernance, Junta de Andalucía, www.cespi.it/GOVMED/estrategia2020.pdf

⁸ Véase Gonzalo Escribano (2011), “Cambio político y economía en el mundo árabe: algunas implicaciones para España”, ARI n° 49/2011, Real Instituto Elcano, http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/riielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=elcano/elcano_es/zonas/es/mediterraneo+y+mundo+arabellari49-2011

y el desarrollo del Estado de las autonomías (que acercó el proceso político a los ciudadanos y a los territorios). Pero ese proceso fue sin duda lubricado por las perspectivas de plena integración en la Comunidad Europea (con el consiguiente aflujo de inversión extranjera) y, en particular por los fondos estructurales europeos.

Ahora bien, la proyección de esa experiencia no debe limitarse a la organización de seminarios, las asesorías áulicas o la disolución pasiva de la acción española en las políticas de cooperación de la UE en la región. La política mediterránea de España no puede fiarse exclusivamente al *soft power* que le otorga su experiencia de modernización y democratización y la incondicionalidad que se le supone en la defensa de los intereses de los socios mediterráneos. España debe defender activamente en el seno de las instituciones comunitarias, empezando por la inminente negociación de las Perspectivas Financieras 2014-2020, un modelo de integración de los países mediterráneos en la órbita económica y política europea similar al modelo del que ella se benefició. Debe hacerlo, además, recurriendo a todos los instrumentos de una diplomacia moderna como la elaboración de marcos conceptuales, simulaciones y otros instrumentos de negociación y *lobby* que articulen y difundan sus posiciones, estrategias de diplomacia pública o articulación con la acción de los ministerios sectoriales (incluido el de Trabajo). Aunque España lleva al menos desde 2005 reconociendo la conveniencia de un horizonte de extensión de los fondos estructurales a los socios mediterráneos, por lo menos en el marco del estatuto avanzado (así lo recogieron tímidamente las Conclusiones de la Cumbre Euromediterránea de 2005 en Barcelona, y a ello alude también el documento conjunto sobre el estatuto avanzado UE-Marruecos de 2008), aún no conocemos cuáles son el concepto y las propuestas concretas españolas al respecto, como tampoco se ha conocido hasta ahora un plan alternativo al empantanamiento de la cooperación multilateral euromediterránea causado por el embrollo de la UpM.

Por otra parte, la problemática situación del empleo en la que se halla inmersa España en el frente interno no debe servir de excusa para que el Ministerio de Trabajo e Inmigración se desentienda de las dinámicas regionales en este ámbito en el Mediterráneo. España tiene, pese a la actual crisis del empleo, una valiosa experiencia en gestión de políticas de empleo, tanto a nivel nacional como a nivel regional o local, y los instrumentos y los recursos para compartirla con sus países vecinos mediterráneos (mediante hermanamientos, asistencia técnica, cooperación descentralizada, etc.). En el último lustro, la Agencia Española para la Cooperación Internacional y el Desarrollo (AECID) ha financiado proyectos en materia de empleo o políticas de empleo en América Latina y en el Sahel; no hay razón para no hacerlo en el Magreb y todo el norte de África, donde las prioridades de la cooperación española han sido otras.

Conclusión

Millones o billones para la estabilidad en Europa

En la visita realizada a Túnez el 21 de febrero por la alta representante de la UE para la Política Exterior, Catherine Ashton, ésta anunció a sus interlocutores tunecinos la aprobación de una ayuda extraordinaria de 17 millones de euros como apoyo inmediato a corto plazo a la transición democrática y asistencia a las regiones más pobres del interior. La respuesta de un ministro tunecino fue muy elocuente: “¿ha dicho millones o billones?”. Más tarde, el ministro de Industria tunecino observó que Bruselas parecía no entender la escala de los cambios históricos que se están produciendo en el sur del Mediterráneo. En cualquier caso, en su oferta a los países mediterráneos, la UE no sólo se juega el alcance de sus ambiciones como actor global, en la medida en que sea capaz o no de anclar a los países de la ribera sur del Mediterráneo al área de influencia europea, sino que también se juega que el signo de una de las variables de su propia función de estabilidad sea positivo o sea negativo.

Iván Martín

Investigador asociado del Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI)

Documentos de trabajo y libros publicados

Documentos de trabajo publicados en abril

Asia Central en las estrategias regionales para Afganistán

Nicolás de Pedro y Gabriel Reyes Leguen

DT 9/2011 - 05/04/2011

Novedades en inglés

EU-Turkey Accession Negotiations: the State of Play and the Role of the New Turkish Foreign Policy

Mahir Ilgaz and Ilke Toygür

WP 8/2011 - 04/03/2011

Libros publicados recientemente

Estudio Elcano 2: Índice Elcano de Presencia Global, IEPG

Autores: Iliana Olivé e Ignacio Molina. Con la colaboración de Ángel Badillo, Émerson Corrêa, Carola García-Calvo, Narciso Michavila y Antonio Vargas.

Editado por: Real Instituto Elcano

2011

Con el IEPG, el Real Instituto Elcano viene a sumarse a los esfuerzos realizados desde el mundo académico, algunos organismos internacionales y diversos *think tanks* para conceptualizar la globalización y la capacidad que tienen los diferentes países de moldear ese proceso a partir de su posicionamiento internacional en distintos ámbitos: económico, militar, científico, social y cultural.

Internacionalización, crecimiento y solidaridad. Los españoles ante la globalización

Autores: Javier Noya, Federico Steinberg y Beatriz Rodríguez

Editado por: Real Instituto Elcano y Tecnos

2010

Primer monográfico publicado en España sobre el impacto en la opinión pública de la globalización, que –desde el 11-S y tras diez años de prevalencia del terrorismo internacional y la seguridad- vuelve a la agenda intelectual y política.

Informe Elcano N° 12: Inmigración: propuestas para un nuevo periodo

Autora: Carmen González Enríquez

Editado por: Real Instituto Elcano

2010

Analiza aspectos relacionados con la gestión de la política migratoria, la incorporación de los inmigrantes al mercado de trabajo y su integración social; y propone una política migratoria enfocada al desarrollo económico y la cohesión social.

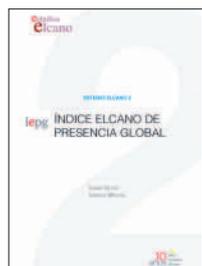
La Internacionalización de la empresa española. Estudio monográfico sobre el entorno económico y las oportunidades de inversión en: Brasil

Autores: Alfredo Arahuetes, con la colaboración de Julio Sergio Gomes de Almeida y André Moreira Cunha

Editado por: Real Instituto Elcano, ICEX e ICO

2009

Sexto volumen de esta serie que analiza las oportunidades de comercio e inversión en diferentes países, en esta ocasión Brasil.



ARI, especiales Elcano, materiales de interés y próximas actividades

ARI publicados en abril

La telenovela en América Latina: experiencia de la modernidad en la región y su expansión internacional

Marta Mariasole Raimondi
ARI 74/2011 - 19/04/2011

Aid to Haiti: Reconstruction Amidst Political Uncertainty

Marc J. Cohen and Amélie Gauthier
ARI 61/2011 - 29/03/2011

El terremoto de Tohoku (Japón) de marzo de 2011: implicaciones económicas

Pablo Bustelo
ARI 72/2011 - 18/04/2011

Ideas e intereses en la reforma de la gobernanza económica del euro

Federico Steinberg
ARI 70/2011 - 15/04/2011

La necesidad de un sistema abierto de evaluación en las misiones PCSD de la Unión Europea

Félix Arteaga
ARI 69/2011 - 14/04/2011

La sociedad civil y las perspectivas de cambio político en Argelia

Laurence Thieux
ARI 68/2011 - 14/04/2011

Siria ante la revuelta: el blindaje del régimen

Ignacio Álvarez-Ossorio
ARI 66/2011 - 13/04/2011

Empleo y políticas de empleo en el Norte de África: de causas de las revueltas a claves de la transición

Iván Martín
ARI 64/2011 - 05/04/2011

¿Qué nos dice la propaganda yihadista sobre las revueltas del Norte de África?

Manuel R. Torres Soriano
ARI 63/2011 - 05/04/2011

América Latina frente al conflicto libio: respuestas a la Resolución 1973

Carlos Malamud
ARI 62/2011 - 30/03/2011

Novedades en inglés

The Internationalisation of the Renminbi: Prospects and Risks

Miguel Otero-Iglesias
ARI 73/2011 - 18/04/2011

Al-Qaeda's Persistent Sanctuary

Seth G. Jones
ARI 67/2011 - 13/04/2011

Euro-area Fiscal Governance: A Guide for the Perplexed at Times of Crisis

Luis Guirola
ARI 65/2011 - 12/04/2011



Crisis en el mundo árabe

El Real Instituto Elcano presenta este Especial sobre los acontecimientos en el mundo árabe con el objetivo de proporcionar análisis de la situación y facilitar a sus lectores el acceso a materiales e informaciones disponibles sobre el tema. Secciones: Respuesta a la crisis, Notas del Observatorio, Notas de actualidad, Análisis del Real Instituto Elcano, Think Tanks y Materiales de Interés, Medios y Web Social, Actividades y Multimedia.

<http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/EspecialesElcano/CrisisMundoArabe>



Índice Elcano
de Presencia Global

Índice Elcano de Presencia Global

El Índice Elcano de Presencia Global (IEPG) es un índice sintético que ordena, cuantifica y agrega la proyección exterior de diferentes países en los terrenos económico, militar, científico, social y cultural. Secciones: Componentes e indicadores, Estudio Elcano 2 (metodología), Resultados 2010.

<http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/IndiceElcanoPresenciaGlobal>

Materiales de interés

BM- Informe Desarrollo Mundial 2011: Conflictos, Seguridad y Desarrollo

Según este informe del Banco Mundial, hecho público el 11 de abril de 2011, las tasas de pobreza son 20% más altas en los países que en las tres últimas décadas se han visto afectados por ciclos de violencia. Así, este organismo internacional calcula que cada año de violencia en un país determinado se asocia con un retraso en la reducción de la pobreza de casi un punto porcentual.

<http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/Recursos/MaterialesdeInteres>

CDFAI - The New Terrorism: Understanding Yemen

El *think tank* Canadian Defence and Foreign Affairs Institute publicó el primero de marzo este informe sobre la implantación de al-Qaeda en Yemen, uno de los países más pobres del mundo árabe, y que, junto a Pakistán, se ha convertido en uno de los principales baluartes de la organización terrorista.

<http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/Recursos/MaterialesdeInteres>

BID - One region, two speeds?: Challenges of the new global economic order for Latin America and the Caribbean

Informe del Banco Interamericano de Desarrollo que analiza cómo ha afectado la crisis financiera en la región latinoamericana y apunta algunas perspectivas de cómo puede evolucionar la zona en el futuro.

<http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/Recursos/MaterialesdeInteres>

UNHCR - Asylum Levels and Trends in Industrialized Countries 2010

La Agencia de la ONU para los refugiados (UNHCR, en sus siglas en inglés) ha publicado las estadísticas 2010 sobre peticiones de asilo en 38 países europeos y en otros 6 países no europeos seleccionados.

<http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/Recursos/MaterialesdeInteres>

Próximas actividades

27/04/2011

Mesa redonda sobre la situación en el mundo árabe

Lugar: Universidad de Córdoba

Organización: Universidad de Córdoba y Real Instituto Elcano

Con la participación de varios miembros del Observatorio: Crisis en el Mundo Árabe del Real Instituto Elcano, moderada por Manuel Torres Aguilar, Director de la Cátedra Unesco de Resolución de Conflictos y Vicerrector de Estudiantes y Cultura de la Universidad de Córdoba.

26/05/2011

Mesa redonda "Tomarse en serio el crecimiento y la innovación en Europa: cómo gobernar y financiar la Estrategia UE-2020".

Lugar: 9.30 h, Representación de las Instituciones Europeas en Madrid

Organizan: Embajada de Hungría y Real Instituto Elcano

Actividades pasadas

Actividades realizadas en abril

19/04/2011 2011

Desayuno con Ayaan Hirsi Ali

La activista somalí habló sobre “Del Islam a Occidente, un itinerario personal y político”



14/04/2011

Visita de una delegación del Instituto de Estudios Internacionales de Shanghai (SIIS)

13/04/ 2011

IV Forum Trilateral Europa-América Latina-USA/Canadá

El foro en esta cuarta edición estuvo dedicado a “Medios de comunicación y gobernabilidad” y “Seguridad ciudadana e impacto multidimensional del narcotráfico”. Contó, entre otros, con la participación de Óscar Arias, expresidente de Costa Rica y premio Nobel de la Paz.



11/04/ 2011

Almuerzo con el profesor iraní Hamid Dabashi de Columbia University

El profesor Dabais habló sobre “A New Geogrophy of Liberation”.



8/04/2011

2ª Jornada “Europa a debate”

Dedicada en esta ocasión a “Lecciones de la crisis en los mercados financieros europeos”.

6/04/2011

Visita de jóvenes líderes norteamericanos

En el marco del programa de visitantes que organiza la Fundación Consejo España-EE.UU, visitó el Instituto un grupo de jóvenes líderes norteamericanos.



1/04/2011

Desayuno Markos Kyprianou

El Ministro de Asuntos Exteriores de Chipre disertó sobre “Cyprus: 7 Years of EU Membership. Challenges and Prospects”.



31/03/2011

Desayuno de trabajo con Chris Littlecott

El Policy Senior Adviser de la Green Alliance habló sobre “El apoyo a una economía baja en carbono en un presupuesto europeo reformado”.



30/03/2011

Presentación de la 26ª oleada del BRIE a los medios de comunicación

30/03/2011

Jornada de difusión del modelo de inversión extranjera y desarrollo (IDE/D) con especial referencia a República Dominicana.

Organizado por la Fundación Carolina y Real Instituto Elcano.



Patronato, Consejo Asesor Empresarial y Consejo de Medios

Patronato

Presidente de honor: SAR el Príncipe de Asturias

Presidente **Gustavo Suárez Pertierra**
Vicepresidente **Antonio de Oyarzábal**
Secretario **José Manuel Romero**

Felipe González, ex presidente del Gobierno
Marcelino Oreja, ex ministro de Asuntos Exteriores y Ex comisario Europeo
Javier Solana, ex ministro de Asuntos Exteriores, Educación y Cultura
Gabriel Elorriaga Pisarik, representante del Partido Popular
Eduardo Serra Rexach, ex presidente del Real Instituto Elcano
Emilio Lamo de Espinosa, ex director del Real Instituto Elcano
Juan José Linz, cátedra Sterling de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad de Yale



Consejo Asesor Empresarial



Consejo de Medios



El Real Instituto Elcano no comparte necesariamente las opiniones manifestadas en los documentos firmados por sus colaboradores y difundidos en su página web o en cualquier otra publicación del Real Instituto. El Instituto considera que su misión fundamental es servir de foro de discusión y análisis, estimulando el debate y recogiendo opiniones diversas sobre temas de la actualidad internacional, y muy particularmente sobre aquellos que afectan a las relaciones de España y su repercusión en los diferentes ámbitos de la sociedad española.